



La paz, Odebrecht y las presidenciales del 2018

NO A LA 'REPÚBLICA DEL COSCORRÓN' NO AL URIBISMO ENEMIGO DE LA PAZ

Ver editorial / 2, 3 y 4

Bogotá: privatización de la ETB

CABILDO ABIERTO REFUTA AL ALCALDE PEÑALOSA

No fue a sombrero, sino a birretazo limpio como salió el alcalde Peñalosa al término de la segunda sesión del cabildo abierto sobre la venta de la ETB, el pasado 7 de marzo. Cabildo convocado por varias decenas de miles de firmas de ciudadanos de la capital, en una campaña ejemplar del sindicato de trabajadores de la ETB para conservar el carácter público de

esta empresa. Aunque la figura del cabildo no es vinculante, logró el objetivo de socializar con la ciudadanía esta desafortunada feria de los activos de la ciudad. No solo por la agitación del tema, sino porque contribuye al proceso de la Revocatoria. / 6



Yezid García, exconcejal de Bogotá y Secretario general (e) del PTC, interviene en el cabildo.

CAJAMARCA TRAZÓ EL CAMINO

Acogiéndose a los principios establecidos por la Ley 1757 de 2015, el pueblo de Cajamarca el pasado 26 de marzo dijo No a las pretensiones expoliadoras de la transnacional Anglo Gold Ashanti. Ante la pregunta con la cual se convocó al municipio a consulta popular: ¿Está usted de acuerdo Sí o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 votantes, es decir el 97%, rechazó el proyecto La Colosa que busca extraer oro en unos de los proyectos mineros más grandes del mundo y que afectaría de manera considerable los ecosistemas de paramo en su extracción. / 11

La corrupción en Colombia

EL GOTA A GOTA DEL DESTAPE DE ODEBRECHT

La opinión democrática debe aclarar que Juan Manuel Santos en la campaña presidencial de 2010 era el candidato del uribismo, debe quedar claro que Odebrecht, más que "acercarse" a Santos, con sus

aportes estaba complaciendo al gobierno de Uribe Vélez en 2010. Lo principal es consolidar el proceso de paz con las Farc. / 16 y 17



Pies descalzos (II)

INICIOS DE UNA POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

En 1974 con el compromiso electoral y el deseo juvenil de una generación protagonista del movimiento estudiantil empeñada en llegar más allá de lo realizado, ante el llamado del Partido a extenderse hacia el campo, decenas de jóvenes dejaron la vida citadina y salieron con la mente abierta y las manos limpias, a confrontar sus ideas con grupos poblacionales ajenos a sus experiencias anteriores. La directriz fue "deshacerse de todas las ataduras y quitarse los zapatos para meterse al barro". A dicha política se le conoció como los pies descalzos. / 8

LOS ESTUDIANTES SE MOVI-LIZAN EN BOGOTÁ CONTRA LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Después de las importantes movilizaciones realizadas por la juventud y el estudiantado al final del semestre pasado, las cuales contribuyeron de manera decisiva a presionar la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, ha empezado el 2017 con un alentador y positivo resurgir de estudiantes y sectores de la comunidad educativa, que demuestran el malestar y rechazo a las políticas adoptadas por el gobierno de Peñalosa y que deterioran las condiciones para una educación de calidad. Se han presentado acciones de movilización, denuncias, asambleas permanentes e inconformismo generalizado. / 9

La política industrial de Trump

EL RESPALDO A LA MÁS RANCIAN OLIGARQUÍA GRINGA

Trump anuncia medidas para recomponer la economía, pero tendrá muchas dificultades. La promesa de reinstalar en su país las factorías será imposible de cumplir, pues significaría obligar a sus empresarios a perder la ganancia que sacan de los bajos salarios que pagan en las factorías en países atrasados. Ante la imposibilidad de lograr el retorno, lo que pondrá en marcha será la renegociación de los TLC. Por otra parte, la rebaja de impuestos ocurrirá, pero ese factor no será tan disuasivo para que reinstalen las fábricas en EE. UU., pero sí para seguir consolidando el respaldo de la más rancia oligarquía gringa. / 10

En el centenario de la Revolución Rusa de 1917

INTERPRETACIONES RECIENTES SOBRE LA GESTA DEL PUEBLO RUSO

En el marco del centenario de la Revolución Rusa, se editarán clásicas y nuevas obras sobre los decisivos años de la Gran Guerra y el ascenso bolchevique al poder. Aun cuando no se hará un exhaustivo balance bibliográfico, se hará mención de aquellas obras que se editarán este 2017. Reseñaremos la producción bibliográfica elaborada por quienes ejercieron roles diplomáticos y funciones estatales en el marco de la Guerra Fría. / 14 y 15

editorial

LA PAZ, ODEBRECHT Y LAS PRESIDENCIALES DEL 2018

NO PERDER EL HILO CONDUCTOR

No corren tiempos apacibles en Colombia. Cual rayo, no en cielo sereno sino en uno ya bastante encapotado, sobrevinieron sobre Colombia las revelaciones del escándalo Odebrecht. En lo que va del año, verdaderas ráfagas noticiosas se suceden sin tregua; no terminan de asimilar los colombianos la conmoción del día cuando sobreviene otra nueva. Los sobornos de la multinacional brasileña salidos a la luz se ventilan en Colombia alrededor de los contratos Ruta del Sol II, el otrosí para el tramo Ocaña-Gamarra, el túnel Tunjuelo-Canoas, y el de navegabilidad del río Magdalena. Dos exviceministros del Gobierno Uribe, dos exasesores presidenciales de la misma administración, un director y altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, directivos del Banco Agrario, el actual director de la Dian, dos exministras del Gobierno Santos, el actual director del Fondo para el Cambio Climático, exparlamentarios y congresistas en ejercicio, el expresidente de Corficolombia del Grupo Aval, algunas otras empresas privadas y varios particulares han sido acusados, vinculados al proceso Odebrecht o llamados a declarar. En especial, se investigan hechos según los cuales habrían ingresado dineros de la cuestionada multinacional brasileña a campañas presidenciales. En febrero de 2014, en Sao Paulo, Odebrecht, amén de servir de puente entre el asesor de campañas Duda Mendonça y directivos de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga para adelantar su publicidad, desembolsó para ello un pago adicional de 1,6 millones de dólares. En las campañas de Juan Manuel Santos se investiga el pago de 400.000 dólares por afiches, el de un millón de dólares por la realización de encuestas contratadas en Panamá, y el testimonio de Otto Bula sobre el millón de dólares supuestamente dirigido a Prieto, el gerente de la campaña de Santos. La complicada situación a la que ha sido empujado el gobierno, manifiesta en los ataques que han arreciado contra el primer mandatario desde el uribismo y varios otros sectores, en un momento en que su imagen registra el más bajo nivel, se percibe en el título del artículo de análisis de una conocida publicación: “Los aprietos de Santos”. Se trae allí a cuento un eventual juicio de destitución de Santos por el Senado como consecuencia del escándalo que, aunque descartado por el autor del artículo como improbable, muestra que el solo hecho de que se ventile como uno de los desenlaces posibles, revela la gravedad de la situación.

Se prevé que la lista de involucrados siga creciendo y se conjetura que las revelaciones apenas comienzan. La incesante secuencia dio lugar, con similar celeridad, al estupor ciudadano, la indignación y la voluntad de emprender una campaña contra la corrupción. Con razón, se estiman en astronómicas sumas las billonarias pérdidas anuales causadas por la corrupción,

se conceptúa que Colombia no puede prosperar padeciendo semejante flagelo y, como corolario, se lanzan campañas para acabar con el abominable mal de una vez por todas.

¿Por qué sobreviene Odebrecht?

La lucha contra la corrupción es una genuina bandera democrática que expresa un interés común fundamental de los colombianos. Lo cual no es óbice para reparar en el origen *sui generis* de la actual oleada anticorrupción. El hecho es que no fue desde marzo de 2014 —cuando la policía federal del Brasil dio a conocer el inicio del escándalo de Odebrecht— que la justicia colombiana tomó cartas en el asunto; la conmoción en Colombia no se sintió sino a partir del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 22 de diciembre del 2016. Incluso, como se ha denunciado, tamañas irregularidades ahora salidas a flote, tuvieron lugar en los contratos Odebrecht en Colombia aun después de que en Brasil ya se había destapado la corrupción. Pero solo fue casi tres años más tarde, cuando el Departamento de Justicia norteamericano informó que Odebrecht adelantaba diabluras en 12 países de 2 continentes, América y África, que reaccionó la justicia colombiana. Tardanza que, por supuesto, no vuelve ineficaz sino muy pertinente la justa acritud y el clamor de sectores y corrientes políticas democráticas en pro del combate contra la corrupción. Pero que reclama llamar la atención sobre el inconfundible aire colonial que reviste la actuación del establecimiento colombiano, hasta en causas justas, solícito ante cada movimiento o señal del imperio.

...el largo brazo de la justicia gringa

El asunto plantea interrogantes insoslayables. ¿Desde cuándo Estados Unidos actúa como cruzado defensor de los recursos públicos de los países del subcontinente?, ¿acaso tal rigor y severidad se ejercen contra la propia corrupción norteamericana? El último informe mundial de Oxfam denuncia que la riqueza de los superricos del planeta escondida en paraísos fiscales asciende a 7,6 billones de dólares. Buena parte corresponde a megabillonarios estadounidenses. ¿Qué hace Estados Unidos frente al entramado global de la industria de gestores de patrimonios gigantes y paraísos fiscales que posibilita este fraude al fisco de su propio país y de innumerables otros, y que ahonda la desigualdad social planetaria? En la crisis de 2008 mucha gente perdió su vivienda en Estados Unidos, ¿cuáles fueron las medidas aleccionadoras contra la élite de Wall Street que generó la crisis de las hipotecas de aquel año? En esa crisis, ¿no hubo un rescate superbillionario de corporaciones bancarias y financieras, primero de Bush y luego por Obama? A propósito: ¿qué responsabilidad atañe a las entidades bancarias gringas cuyas redes sirvieron para los pagos de las coimas de Odebrecht?

El hilo conductor de la táctica en lo que puede convertirse en fase de transición entre dos épocas del país —la finalización del conflicto armado y el inicio de un período sin violencia en la política— es el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Lo menos que suscita la inefable pesquisa gringa en Brasil es un profundo escepticismo. ¿Por qué en Brasil? Recuérdese que el Alca era la estrategia económica matriz de Bush padre para integrar América en un solo mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y tómese nota de que el sepulturero principal de aquel “sueño americano” imperialista fue el Brasil del gobierno de Lula, junto a los de Chávez y Kirchner, en la Cumbre de Mar del Plata, en 2005. Es decir, el hundimiento del Alca era una vieja cuenta por saldar. Desde luego, los sobornos de Odebrecht suministraron un motivo real; la ocasión la pintan calva. No le iba mal al Tío Sam acreditar su justiciero Departamento, tratándose en realidad de un arponazo directo al corazón y a los gobiernos de los Vientos del Sur. Así resultase uno que otro “daño colateral” sobre gobiernos “amigos”, como el de Colombia. Si Washington había sido capaz de hacer la guerra contra Irak, invadir su territorio y derrocar su gobierno sobre la base de una mentira —la supuesta producción iraquí de armas de destrucción masiva—, ¿por qué iba a desaprovechar un capítulo real, el de Odebrecht, para realizar sus intereses? El asunto va, además, en la dirección de que la única justicia universal es la del imperio.

El Grupo Sarmiento Angulo y el Fiscal

La algaraza de los medios de Colombia se ha cuidado de escarbar poco —con notables excepciones— en el papel de los socios de los contratos de Odebrecht en Colombia. La columnista María Jimena Duzán reveló un interesante hallazgo: un documento en el cual se registra que Corficolombia, la financiera del Grupo Sarmiento Angulo que se declaró “víctima” de Odebrecht, compartía conocimiento e iniciativa con la multinacional brasileña en los sobornos adelantados. Y es evidente que las afirmaciones de que la firma de abogados de quien hoy preside la Fiscalía general asesoró a Corficolombia, socia de Odebrecht, y que, en su anterior condición de superministro del Gobierno Santos, fue partícipe mediante el Conpes 3817 de 2014 de la autorización del sector 2 de la Ruta del Sol, acusaciones lanzadas por el senador Robledo, metieron en los palos al zar de la justicia colombiana.

Reficar, dentellada gigante de la corrupción

Según ha revelado el Contralor General, un detrimento del patrimonio público de la nación, “el más grande en la historia del país”, que supera los 6.080 millones de dólares, tuvo lugar en Reficar. Los más de 30 altos funcionarios que han sido

llamados a declarar podrían sacar a flote el mayor y más escabroso capítulo de la gran corrupción colombiana. El detrimento se materializa en las deficiencias de la ejecución de las etapas del proyecto, estimadas en 4.144 millones de dólares, y el lucro cesante por la entrada tardía en operación de Reficar, en 1.936 millones de dólares. El proyecto de la Refinería de Cartagena, Reficar, que debía estar terminado a finales de 2013, apenas se concluyó en 2015, casi dos años y medio después. Los costos del proyecto se treparon, entre octubre de 2009 y octubre de 2015, de 3.993 a 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo inicialmente previsto. Es decir, duplicó su valor en menos de cinco años. Los hallazgos se cuentan por montones: anticipos sin legalizar, graves deficiencias en los contratos de diseño e ingeniería, sobrecostos por incrementos en las horas de trabajo —muchas de las cuales supuestamente realizadas en países como Holanda o Egipto—, exorbitantes pagos por grúas que no se utilizaron, un contrato de andamios que de su precio inicial saltó a un 675% más, y más sobrecostos multimillonarios por alquiler de baterías sanitarias, llamadas telefónicas y hasta minibar. La firma constructora CB&I, Chicago Bridge & Iron, y la consultora, Foster Wheeler, con sede en Houston (Texas), ambas de Estados Unidos, actuaron a su antojo, hicieron de las suyas y siguen efectuándolo. “Sin duda, concluye la Contraloría, CB&I no tenía experiencia para la ingeniería, el suministro y la construcción de una refinería”, y sobre las mismas empresas de la hazaña denuncia que “Aquí no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo”. Lo curioso es que todo esto se efectuó y aún no termina, bajo la responsabilidad de conspicuos miembros del estrellato económico, administrativo y empresarial del establecimiento colombiano, tenidos como genuinos sabios de la economía y los asuntos públicos (entre otros, el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Fabio Echeverri Correa, Hernando José Gómez, Roberto Steiner, Javier Gutiérrez y Carlos Gustavo Arrieta). Por lo demás asiduos alcaballeros, fervientes privatizadores, activos divulgadores de las especies neoliberales y rendidos apologistas de los tratados de libre comercio. Tanto Odebrecht como Reficar, duras lecciones para el país, indica que es hora del balance sobre los desastrosos efectos de las privatizaciones —en las cuales el Estado y Colombia siempre pierden—, que arrojaron la salud



a la peor crisis de su historia, deterioraron la educación pública y menoscabaron los derechos de los trabajadores. Al igual que la evaluación de resultados sobre los TLC, que terminaron arruinando el agro, arrasando la industria nacional, acentuando el esquema del atraso y destruyendo el medio ambiente.

El efecto Odebrecht sobre la paz

Justo cuando el país llega a la fase crítica del proceso de terminación de la violencia política, la implementación de los acuerdos de paz, hace su eclosión el escándalo Odebrecht con su avalancha de revelaciones sobre la nefasta lacra de la vida nacional: la corrupción. Resulta, por tanto, ineludible intentar evaluar el alcance de las repercusiones de este escándalo y a la par, esforzarse por discernir el verdadero eje del rumbo de la vida nacional.

Es evidente que el efecto inmediato y más general del escándalo Odebrecht ha sido el de añadir una casi desmesurada dificultad, si no interrumpir de tajo, al fundamental sendero que transita el país en los últimos cinco años, el del proceso de paz. Este ha enfrentado de por sí un cúmulo de factores y circunstancias adversas. Odebrecht sobreviene en el momento del arranque del cumplimiento de los acuerdos de paz, que requiere el respaldo y la concentración de la atención pública en sus ejecutorias. En lugar de ello, el sarjal de informaciones y sórdidos detalles de Odebrecht opacaron casi del todo un acontecimiento de trascendental importancia: la concentración de los efectivos de las Farc en los campamentos, escenario de la antesala del decisivo acto de dejación de las armas, con el cual se debe dar comienzo a la finalización definitiva de un conflicto armado, con todos sus horrores, de más de medio siglo.

Pero la cuestión no reside solo en un desvío crucial de la atención pública. Odebrecht amenaza tanto con imposibilitar las condiciones institucionales para la implementación de los acuerdos de paz, como con influir a fondo en el deterioro del estado ánimo de los colombianos para privar de respaldo dicha implementación. Si bien es cierto que el obstáculo principal de la paz en el país es la acción de las fuerzas de ultraderecha encabezadas por el uribismo, no lo es menos que la repulsa popular a la obstinación de un gobierno en proseguir un modelo privatizador, generador de atraso y postrado ante Washington, ha agregado una considerable colección de escollos al fundamental proceso de terminar el conflicto armado y civilizar la contienda política. Son los varios lustros de padecimiento del modelo neoliberal, cuyos efectos acumulados en las condiciones generales de vida han terminado por generar una explicable irritación social contra el gobernante actual, la causa profunda del socavamiento, de la erosión creciente de la confianza y credibilidad en las instituciones imperantes y en el establecimiento que las constituye. El efecto Odebrecht bien puede ocasionar el desbordamiento de tal descontento, incredulidad y desprestigio hacia los cauces institucionales habituales y dar lugar a salidas al malestar popular por nadie previstas. El antecedente reciente del plebiscito, en el cual ganó el No —demostración fehaciente de que la acumulación de factores de inconformidad pudo ser manipulada por el uribismo—, muestra que

No es cierto que la paz sea “página doblada” por el país. El asesinato en serie de líderes sociales y defensores de la restitución de tierras al campesinado, el mayor nubarrón actual del proceso de paz, se constituye en siniestra advertencia de lo que puede retornar para el país. Sin la consolidación de la paz la lucha por la democracia o la batalla contra la corrupción, que es una de sus facetas mayores, podrán librarse a fondo.

uno de los cursos factibles de la situación podría desembocar en favor de la extrema derecha. En el momento actual el uribismo sigue jugando a que más sectores de la población identifiquen la paz con el gobierno que rechazan, y así le quiten o debiliten su apoyo a la primera. En el evento de un desarrollo de Odebrecht negativo más allá del límite soportable para el gobierno, y de que este colapse como consecuencia, las posibilidades de que los acuerdos de paz pudieran continuar su fase de implementación serían nulas o muy inciertas.

La carrera por la presidencia

Pareciera temprano para auscultar la carrera por la presidencia en el 2018. Mas la notoria anticipación de sus inicios y la indisoluble conexión de los mismos con los acontecimientos políticos, obligan a aguzar la visión, incluso más allá del horizonte actual. La cuestión es si la tendencia a la formación de dos bloques enfrentados alrededor del candente asunto de la paz, que terminó prevaleciendo en las anteriores elecciones presidenciales, continúa vigente o no. Lo cual remite enseguida a esclarecer el interrogante de si la paz ya pasó a la condición de problema resuelto, “chuleado”, de si el país ya volteó esa página como dicen algunos, para asegurar enseguida que lo principal hoy es la lucha a fondo contra la corrupción.

Las dos fuerzas de la extrema derecha, opuestas u hostiles a la paz —encabezadas respectivamente por Uribe y Vargas Lleras—, aunque sus rencillas anteriores no hayan sido del todo zanjadas, exploran sus posibilidades mutuas y conjuntas y se mantienen apegadas a sus objetivos, que aparecen comunes a ambas. En cambio, los grandes segmentos sociales y políticos que apoyan la paz se debaten en un terreno pantanoso de problemas pendientes por resolver, como el de cuál debe ser la amplitud de la coalición requerida, y si el empeño principal de la hora es el respaldo a la paz o la lucha contra la corrupción.

La extrema derecha vs. el país democrático

Es claro que el uribismo acusó un revés con las revelaciones Odebrecht sobre el aporte de la multinacional a la campaña del principal candidato del Centro Democrático, Jorge Iván Zuluaga, que lo obligaron a retirarse de la contienda presidencial. Lo cual no fue inconveniente, acto seguido, para que el principal jefe de las fuerzas adversarias de la paz, el expresidente Uribe, solicitara al presidente Santos, como si nada hubiese ocurrido, su renuncia por el ingreso de dineros de la misma corporación a la campaña del actual mandatario. El más acérrimo adversario de la paz calcula, no sin fundamento, que un eventual colapso del actual gobierno, arrastraría consigo los acuerdos logrados en el proceso de negociaciones

de La Habana. En todo caso, en mensaje reciente a sus seguidores, Álvaro Uribe puntualiza la conveniencia para su causa de armar una coalición. Un reconocimiento de que, en la batalla por el proyectado retorno a la Casa de Nariño, necesitará reunir la mayor cantidad posible de fuerzas pese a contar con varios precandidatos, entre ellos el exprocurador Ordóñez, no obstante las pedradas que este sigue lanzando contra Vargas Lleras, el potencial aliado del uribismo.

Entretanto, sin parar mientes en las escandalosas novedades del día, como no sea para intentar encauzarlas en provecho propio, Uribe prosigue, impertérrito, su estrategia de enfrentar el proceso de paz y anular sus resultados. De nuevo, el 1º de abril, desde la calle, las huestes del uribismo y otros sectores de la extrema derecha en procesión, vuelven a erizar el paisaje urbano con las banderas de la reacción y el atraso. La misoginia, la homofobia, el confesionalismo más fanático hacia los asuntos de la vida social, la intolerancia, la discriminación, y los dogmas del capitalismo salvaje, reiteran ante el país sus excluyentes y retrógradas divisas. Por supuesto que echan mano sin pudor alguno del escándalo Odebrecht para disparar sus dardos contra el actual gobierno. Pero, sobre todo, cual inalterable *leitmotiv*, esgrimen su declarada voluntad de oponerse a los acuerdos de paz y anuncian que desde el gobierno que dicen conquistarán, los reversarán del todo.

En otras filas afines, las del otro candidato de la extrema derecha, Vargas Lleras, se cumplió hasta el final de su desempeño como vicepresidente su decisión de separarse abiertamente de la política de paz del Gobierno Santos e incluso, en el escándalo Odebrecht, del mismo presidente, al declarar sobre el embrollo que debía investigarse “caiga quien caiga”. Hay que registrar el movimiento del alfil del vargasllerismo en la Región Caribe, Char, de promover una publicitada reunión en Barranquilla con el expresidente Uribe. Muestra palmaria de que en la carrera hacia la presidencia nada los arredra, ni las Oneidas, ni los Kikos ni los Uribe. Desde luego que, por más que el juego de Vargas Lleras le haya valido aparecer ahora como el más fuerte aspirante a la presidencia —si esto se mide con el habitual rasero de las apabullantes maquinarias clientelistas y compravotos de gobernadores y alcaldes alineados, y de sus respectivas facciones políticas regionales y locales—, son ya muchísimos los colombianos que perciben como repulsivo el poder y la influencia así conseguidos, a punta de dispensar como propios planes de vivienda y de construcción de vías con la plata de los impuestos de todos, y de renegar del jefe de la administración en la que ocupaba el segundo cargo de gobierno. Pese a que dentro y fuera de Colombia soplan vientos

de derecha, la puja por la paz como las luchas del pueblo también han permitido revalorizar los lazos de la confraternidad social con los oprimidos y débiles y sus derechos. La indignada repulsa pública al maltrato físico de Vargas Lleras a su escolta puede ser más que un episódico chispazo del avance del país en materia de criterios democráticos de fondo. Su favorabilidad cayó 21 puntos, del 61% diciembre pasado hasta el actual 40%. Puede ser que Odebrecht haya abonado terreno al desenfoco de que la lucha contra la corrupción, y no por la paz, es la primera tarea de la hora. Como, al tiempo, ha contribuido a esclarecer que los sobornos millonarios por los megacontratos son el primer eslabón de una gran cadena que no se remata sino que se reproduce con la compra de electores, sus elegidos y sus gobiernos. No es descartable que este aprendizaje pueda deparar sorpresas en el futuro inmediato, gratas y saludables para el país, y aleccionadoras para los Vargas Lleras.

No a la “república del coscorrón”

No es para desestimar que casi al tiempo que Vargas Lleras anunciara su retiro de la vicepresidencia en acto oficial con bombos y platillos —verdadero acto de lanzamiento de su candidatura presidencial con el apoyo del presidente Santos—, sus contradictores en el partido de la U convocaran un acto al que asistió el grueso de los parlamentarios de esa fracción de la coalición de gobierno. Tampoco que días atrás en una reunión de parlamentarios de la U con el presidente Santos en el Palacio de Nariño, varios de los primeros se refirieron críticamente a la definida actitud del vicepresidente de diferenciarse del primer mandatario en el caso Odebrecht. Y muy significativo que voceros de la misma colectividad precisaran que no están considerando al jefe de Cambio Radical como su candidato a las elecciones presidenciales de 2018 a las que anunciaron irán con su propio aspirante.

Los reparos expresados de tiempo atrás por los dirigentes del liberalismo al presidente Santos sobre actuaciones de Vargas Lleras encontraron su modo de manifestarse en la forma de una consulta interna entre varios precandidatos liberales para escoger el candidato presidencial de ese partido que, de entrada, está planteando que ese partido no considera una eventual proclamación unánime de la candidatura del saliente vicepresidente. La mayor atención merece la disposición planteada por la jefatura liberal a la conformación de una coalición multipartidista cuyo eje sea el cumplimiento de los acuerdos de paz. El principal negociador del gobierno en el proceso de paz, Humberto De La Calle, quien de acuerdo con última encuesta de Gallup registró la más alta imagen favorable, del 49%, según recientes informaciones, lanzará pronto su candidatura como independiente. “Yo ahora creo que lo que no le conviene a Colombia es la república del coscorrón”, dijo De La Calle en reciente acto público. Este No a la república vargasllerista, en sus palabras, o al régimen del cocotazo, en términos de nuestra Región Caribe, resume bien el lema de lucha contra el despotismo de la corriente ultraderechista de la aristocracia bogotana. De destacar su apreciación sobre lo que está al orden del día, una amplia coalición de todos los sectores que respaldaron el proceso de





paz alrededor del cumplimiento de sus acuerdos pactados.

Más de una explicación ameritaría la actitud del presidente Santos hacia quien fuera su vicepresidente. Puesto que la más elemental coherencia entrañaría que quien sucediera a Santos en la jefatura del Estado respaldara resueltamente los acuerdos de paz. Empero, el lazo que pareciera atar el primer mandatario al aspirante presidencial de Cambio Radical, más que un pacto de sangre se asemeja a un verdadero pacto de clase.

Entre algunos de los aspirantes de la izquierda y de otros sectores democráticos —del Polo, de Alianza Verde, del Movimiento Ciudadano— se asoma, con mayor o menor acento y claridad, el planteamiento común sobre la conveniencia de respaldar una sola candidatura con la cual se pueda reunir fuerzas y enfrentar las de ultraderecha. Un indicio de que luego de varios cuatrienios, tras no pocos tropicónes y a regañadientes, la táctica basada en la creencia de que la sola izquierda puede reunir la fuerza suficiente para ganar la presidencia y gobernar empieza a reconsiderarse en los hechos, y comienzan a decantarse dosis de sentido común, como ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales por lo menos para conjurar los peligros mayores. Sin embargo, para ser suficiente, a ese buen comienzo le faltaría que se tuviera en cuenta una evaluación, la más rigurosa y aproximada a la realidad, sobre la correlación de fuerzas existente hoy en Colombia. Apreciación táctica objetiva y prejuicios ideológicos aparte, el real balance de fuerzas se configura en la actualidad entre el bando de quienes aspiran a anular o retorcerles el cuello a los acuerdos de paz y con ello a implantar un régimen de “orden y autoridad”, y quienes creemos que la creación de mejores condiciones para librar lucha contra la corrupción, por los derechos democráticos y la defensa de lo público, por elevar el nivel de vida del pueblo, pasa por el logro de la finalización del conflicto armado, la paz y la civilización de la contienda política. Hoy está claro que si las dos fuerzas de ultraderecha se unen en una candidatura común y la izquierda y demás fuerzas democráticas mantienen insuperadas las brechas que los separan, y sus fuerzas se dispersan en varias candidaturas presidenciales, el uribismo retornaría al poder de la mano del vargasllerismo y a Colombia le esperaría otro oscuro período. En cambio, si izquierda y demás sectores democráticos unificaran fuerzas en un solo aspirante a la presidencia, la batalla podría librarse con opción de triunfo. Debería agregarse que, pese a doctrinarismos y a obstinados clichés ideológicos, el cauce real de la lucha política ha configurado hoy de manera especial en Colombia el campo democrático. Este se conforma con la izquierda, las demás fuerzas democráticas y los sectores de la derecha, de dentro y fuera del gobierno, partidarios de civilizar la contienda política. Y aún haría falta decir, que no hay razón válida para el tácito descarte tendido en torno al nombre del exalcalde de la Bogotá Humana. Gustavo Petro ha sido objeto de la mayor persecución y veto político de nuestro tiempo, pero cuyo alto reconocimiento popular, el mayor de la izquierda y de otros sectores democráticos —único que rivaliza con el de Vargas Lleras—, contra viento y marea, sigue sostenido en sondeos y encuestas

como la de Caracol de finales de marzo. La lógica de la decisiva confrontación política de las presidenciales del 2018 indica que en la escogencia del candidato se cuenten los nombres de Claudia López, Clara López, Antonio Navarro, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Sergio Fajardo y Piedad Córdoba. Y que en esa misma escogencia hubiese avenimiento, una vez incluidos en ella el candidato independiente De La Calle, el del liberalismo y otros que desde el establecimiento apoyan la paz. Y en acuerdo con estos, se determine el procedimiento para escoger el candidato único de la paz y la democracia.

Desde luego que como es sabido, todavía, la mayoría de los aspirantes de izquierda o de sectores democráticos independientes del gobierno se muestran renuentes o abiertamente opuestos a incluir en la eventual y necesaria coalición a fuerzas y candidatos que desde la orilla del establecimiento apoyaron las negociaciones de paz o jugaron en ellas un destacado papel y hoy abogan enérgicamente por el cumplimiento de los acuerdos. Para no hablar de quienes, como avestruces huidizos, ante la complejidad de la situación en el 2012 se refugiaron en una abstención estéril y negaron su apoyo en la contienda presidencial a la candidatura que convenía para derrotar los enemigos de la paz, sin defecto de que más tarde, cuando la batalla ya estaba resuelta, reconocieran estar de acuerdo con la política del gobierno de negociar el fin del conflicto armado.

La paz sigue siendo la clave

No es cierto que la paz sea “página doblada” por el país. El proceso va muy avanzado pero la paz aún no se ha concretado. Ni el uribismo ni sus adláteres cejan en su declarado rechazo y sabotaje al proceso de paz, ni las Farc han completado su dejación de las armas. La ultraderecha colombiana muestra en la persecución de sus fines una claridad y una constancia que se echan de menos en buena parte de la izquierda y demás sectores democráticos. El paramilitarismo sigue vivo y actuante; configura el mayor peligro para el porvenir de Colombia. El asesinato en serie de líderes sociales y defensores de la restitución de tierras al campesinado, el mayor nubarrón actual del proceso de paz, se constituye en siniestra advertencia de lo que puede retornar para el país. Sin la consolidación de la paz, ni la lucha por la democracia, ni la batalla contra la corrupción, que es una de sus facetas mayores, podrán librarse a fondo. No obstante, las mayorías, en reacción de protesta y rechazo a las salidas tradicionales, desencantadas de los partidos tradicionales, indignadas por la corrupción rampante, pero perdida de su horizonte la dimensión fundamental de la paz, sin norte ni orientación justos, podrían ser conducidas bajo toldas ajenas a sus intereses. Por tanto, las dirigencias de las fuerzas democráticas deben emplearse a fondo jugando su esencial papel de trazar el rumbo, animar la movilización e incorporarse a ella. El hilo conductor de la táctica en lo que puede convertirse en fase de transición entre dos épocas del país —la finalización del conflicto armado y el inicio de un período sin violencia en la política— es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Por encima del barullo mediático y de ese pragmatismo de principios complacientes, la lucidez de la izquierda reside hoy en perseverar en esta línea.

27 de marzo de 2017.

El sistema de pensiones de Chile

MODELO DE PRIVATIZACIÓN QUE SE DESMORONA



Pascale Bonnefoy

THE NEW YORK TIMES (RESUMEN)

El descontento sobre las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.

En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían.

Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.

A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo. La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado (las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado).

Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propie-

dad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores expectativas de vida.

Las AFP descartan las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino que reflejan el mercado laboral. Incluyen, dijo, contribuciones insuficientes e irregulares por parte de muchos trabajadores independientes y quienes tienen empleos inestables, temporales o con salarios bajos, y una alta evasión de parte de los empleadores.

Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, concuerda con que las AFP habían hecho bien su trabajo... para su propio beneficio. El dinero que recaudan de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones.

“Ese es un excedente gigantesco que jamás devolverán”, dijo Riesco. “El Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso e irracional”.



A PROPÓSITO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA

Consuelo Ahumada

DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA GACETA, COORDINADORA DEL COLECTIVO MALÚ-PTC, INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PTC Y PROFESORA UNIVERSITARIA

En el transcurso de este siglo, marcado por el afianzamiento y profundización de políticas cada vez más excluyentes y por la extrema concentración de la riqueza en unos pocos, las condiciones económicas y sociales de la mayor parte de las mujeres parecen deteriorarse, a la par con su situación laboral. Llama la atención las extremas dificultades que viven las migrantes en los países del Centro, frente a políticas abiertamente xenofóbicas y racistas. En términos generales, se ha retrocedido con respecto a avances importantes alcanzados en la legislación internacional y en las luchas de más de un siglo por la igualdad de género y por los derechos sociales, individuales y colectivos de la mujer.

En el caso de América Latina, la violencia generalizada contra las mujeres, cuya expresión más extrema son los feminicidios, es decir, el asesinato de una mujer por su condición de mujer, se ha incrementado de manera notable en diversos países, en especial en Argentina, México y la región centroamericana. Los datos de Colombia, escondidos en las noticias de la violencia generalizada de las últimas décadas, también son escalofriantes; en el país hoy se registran cuatro feminicidios al día, con una impunidad del 90% (Oficina de la Equidad de la Mujer, enero 2016)¹. Buena parte de estos crímenes tienen connotaciones sociales y políticas, pero también reflejan el arraigo de una cultura feudal, profundamente patriarcal, que ha sido amparada durante siglos por las creencias religiosas, en particular las



Panel: Desafíos para la mujer en la implementación de los acuerdos de paz, convocado conjuntamente por los colectivos Malú, Un millón de mujeres por la paz y Trabajo digno y paz. Auditorio de Fecode, el jueves 9 de marzo. En la foto, Gloria Florez, Martha Triana, Consuelo Ahumada, Amparo Hernández y Lorena Urrea. También participaron Leonor Sierra, Claudia Mejía, Marcela Clavijo y Estela Hernández.

que provienen del oscurantismo católico. Es precisamente en esta cultura que se afianzan los señores de la guerra y los políticos que los representan, tanto en Colombia como en el mundo entero.

Por ello, a comienzos de año las huestes femeninas tomaron la delantera en la lucha en Estados Unidos y el mundo entero contra el avance del fascismo, representado con la llegada al poder de Donald Trump en el imperio, y el avance de la extrema derecha en algunos países de Europa. Por otra parte, el pasado 8 de marzo las mujeres convocaron a una huelga general en el continente y se movilizaron en varias capitales contra todo tipo de violencia contra la mujer, bajo el grito colectivo que emanó desde Argentina "Ni una menos".

Las mujeres en Colombia han debido afrontar también el creciente recorte a la inversión pública y social, que responde a las políticas de ajuste fiscal, y el deterioro en la prestación de los servicios sociales básicos, en especial la salud, la educación, el acceso a guarderías, por parte de sucesivos gobiernos, que han acogido con entusiasmo y sin el menor reparo las imposiciones de los organismos internacionales y de los

dueños de las finanzas en el mundo. En este punto preciso, el de la política social, tampoco hemos contado ni remotamente con gobiernos nacionales que privilegien la inversión social, tal como sucedió durante una larga década con los gobiernos alternativos del Sur del continente².

En medio de esta situación tan dramática, marcada por múltiples formas de violencia, la mujer colombiana, en especial la del sector rural, ha sido especialmente afectada por el conflicto armado y por sus estragos. Las cifras de violencia sexual en el conflicto armado, así como el número de mujeres y niños desplazados, han sido ampliamente documentados, tanto por la Comisión de memoria histórica como por distintos organismos y entidades internacionales y nacionales. En este respecto, el papel de la Corte Constitucional ha sido fundamental en cuanto a darle visibilidad a tan grave situación. El 14 de abril de 2008 emitió el Auto 092, con respecto a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En dicho Auto identificó diez riesgos o factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su

condición femenina, al tiempo que explicó el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres y le ordenó al gobierno la adopción de un programa para la prevención de dichos riesgos.

Por todo lo anterior, la firma e implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc, a pesar de sus dificultades de toda índole, representa un paso muy importante para empezar a superar tan difícil situación. La generación de unas condiciones democráticas, que permitan el debate civilista en Colombia, propiciará también un escenario más propicio en lucha por alcanzar en Colombia la equidad de género y los derechos de la mujer.

Notas

- 1 Por ello, resulta indignante la convocatoria a la Selección Colombia a un jugador cuya última noticia fue propinarle una violenta golpiza a su esposa en Miami. La actitud complaciente de la gran mayoría de los medios frente al personaje es altamente reprochable y es una muestra fehaciente de esta cultura machista y mafiosa.
- 2 Por ello, no puede dejar de reconocerse los importantes avances en materia de inversión social y de fortalecimiento de lo público que se dieron durante la Bogotá Humana de Gustavo Petro.

LA BAGATELA ★

PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA - PTC - INTEGRANTE ALIANZA VERDE

PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL
MARCELO TORRES

DIRECTOR
Alberto Herrera

COMITÉ DE REDACCIÓN

JEFE DE REDACCIÓN: JORGE E. CHARRY

REDACCIÓN: JUAN MANUEL RIVAS,
MIGUEL ÁNGEL DELGADO

HISTORIA VIVA: CARLOS ZAMORA

INTERNACIONALES: EDMUNDO ZÁRATE

ECONÓMICAS: GALILEO GÁMEZ
Y SILVIO CANTOR

INFORMÁTICA: HERNANDO MEDINA,
MAURICIO VARGAS

EDICIÓN: CÉSAR TOVAR DE LEÓN

Contacto:

Bogotá, Colombia
PBX: (57-1) 2818458 / 2818397
Calle 37 No. 28A-08
bagatelaptc@yahoo.com
ptccolombia@gmail.com
LaBagatelaPTC.Blogspot.com.co

Carta de Marcelo Torres al director de la revista *Semana*

Bogotá, 21 de marzo de 2017

Señor

Alejandro Santos Rubino

Director *Revista Semana*

E.S.D.

Bogotá, D.C.

Apreciado director:

En la edición de la revista *Semana*, com correspondiente a la fecha de 20 de marzo del presente año, aparece un artículo con el título "Los interrogatorios por el desplome de Electricaribe". En el mismo se informa que la Unidad Nacional Anticorrupción llamó a interrogatorio a directivos de la empresa Electricaribe y que "También fueron llamados a interrogatorio los exalcaldes de Chinú, Orlando

Medina; Magangué, Marcelo Torres, y el de Uribe, Abel Giacometto Fuminay." Y añade enseguida "En cuanto a los alcaldes, la Fiscalía cree que se pudieron haber visto beneficiados con los contratos que la gente aún espera. En el caso de Magangué, por ejemplo, se invirtieron 8.264 millones de pesos en seis proyectos que aún están inconclusos y debían llegar 16.650 personas." Ignoro cuál sea la fuente de la revista y en consecuencia la veracidad de la información. En cualquier caso, dado que efectivamente me desempeñé como alcalde de Magangué en el período 2012-2015, y que como el conjunto de la población Caribe comparto plenamente la intervención estatal en la susodicha empresa privada que suministraba el servicio de energía y su reciente liquidación, habida cuenta de la pésima

calidad de dicho servicio padecido por la Región, debo manifestar mi extrañeza por cuanto la información referida trae la inclusión de mi nombre en los interrogatorios anunciados. La razón es muy simple: bajo mi administración el municipio de Magangué no manejó recursos del gobierno nacional en materia del servicio de energía ni efectuó contrato alguno para tal destinación con recursos de esa naturaleza. La comprobación de este aserto no presenta dificultad alguna dada la lista oficial de contratos registrada por cada municipio.

Del señor director con toda consideración,

Marcelo Torres Benavides

CC a la Consejera Editorial Martha Ruiz

La batalla contra la privatización de los activos de Bogotá

CON CABILDO ABIERTO O CABILDO CERRADO, LA ETB NO SE VENDE, SE DEFIENDE

César Tovar de León

EDITOR DE LA BAGATELA

No fue a sombrero, sino a birretazo limpio como salió el alcalde Peñalosa al término de la segunda sesión del cabildo abierto sobre la venta de la ETB, el pasado 7 de marzo. Cabildo convocado por varias decenas de miles de firmas de ciudadanos de la capital del país, en una campaña ejemplar del sindicato de trabajadores de la ETB para conservar el carácter público de esta empresa de comunicaciones.

Ya son lejanos los tiempos del nacimiento de esta empresa por allá en 1884, así como de las cenizas que dejó el incendio que la devoró en 1900 o de su renacer con el nombre The Bogotá Telephone Company en 1906, de su adquisición por la General Electric Ltda. de Londres en 1912, y finalmente de su municipalización en 1940.

A lo largo de su historia esta empresa de los bogotanos ha sorteado muchos intentos de privatización, trece en total, sin que sus enemigos (criollos y extranjeros), aquellos que han querido arrebatarla a la ciudad para beneficio propio, hayan podido cantar victoria. ¡Un magnífico ejemplo de la resistencia ciudadana y de la defensa de lo público!

Hoy estamos frente al segundo intento de Enrique Peñalosa por vender la empresa, y desde la campaña electoral y con la presentación del Plan de Desarrollo y su aprobación por el Concejo de Bogotá, ya no quedaron dudas. Pero todavía los depredadores no pueden cantar victoria, porque, como en los tiempos de su municipalización, hoy la ciudadanía y los trabajadores con sus sindicatos levantaron la bandera de su defensa y, haciendo uso de los mecanismos legales de participación, se dieron a la tarea de convocar el cabildo abierto. En la primera sesión del cabildo, realizada el 28 de febrero, con 41 intervenciones en pro y en contra de la enajenación, los argumentos presentados por la administración y por la comparencia de áulicos invitados (entre ellos los exministros Alberto Carrasquilla y Carlos Caballero Argáez), no se salieron de la cartilla neoliberal: que el papel del Estado no es manejar esos negocios; que es un riesgo frente a la competencia multinacional; que no hay plata para invertir; que lo público es ineficiente; que el Estado es un pésimo administrador; que hay que desregular los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios; que hay que eliminar los subsidios a la población; que hay que adelgazar el aparato burocrático; que los salarios de los trabajadores son la causa de su incompetencia, y un largo etcétera.

En sus dos sesiones el cabildo se desarrolló de manera agitada, entre abucheos, rechiflas y aplausos, pero hay que añadir que la administración hizo gala de todo su poder para llenar el auditorio con fun-

cionarios distritales y convertir el cabildo de abierto, en cerrado. Y como dice Leonardo Argüello, de la dirección de Sinrateléfonos: "es cierto que el presidente del Concejo vulneró y desconoció lo que reza la ley que regula el cabildo abierto, no ofreció ciertas garantías y fue restrictivo".

Entre las intervenciones ciudadanas de la primera jornada se pueden destacar la de Martha Triana, presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital y edil de la localidad de Teusaquillo, quien denunció de manera tajante y valiente las maniobras de la administración en la presentación del Plan de Desarrollo, eludiendo su discusión en este Consejo, en contravía de las normas legales; plan de desarrollo donde venía incluida la venta de las acciones de la ETB. Así mismo, vale resaltar la intervención del empresario y político bogotano, Alex Vernot, quien expresó desde la óptica comercial el cuestionamiento de la venta con el poderoso argumento de que una empresa que da utilidades, es un despropósito económico feriarla.

Pero la argumentación económica más sólida estuvo a cargo del experimentado profesor Eduardo Sarmiento Palacio, quien repitiendo lo dicho y escrito por él en diversos medios de comunicación, nos situó en el escenario real de la compañía, que el alcalde y el gerente pretenden esconder: "La solución la encontró el plan estratégico de la administración anterior (la de Gustavo Petro) en internet y la telefonía celular, que en Colombia y en todas partes del mundo avanzaban por encima del producto nacional. El plan se materializó en una inversión de 1,8 billones que no demoró en manifestarse. Después que los ingresos disminuyeran durante diez años, en 2013 aumentaron 1,5%; en 2014 subieron 0,5%; en 2015 el 3,3% y en el primer semestre de 2016 al 3,5%. Y algo aún más dicente: en 2015 y 2016 crecieron más que en Claro y Telefónica. La empresa se convirtió en una organización dinámica, en la cual las actividades distintas a la telefonía fija crecen más de 5%, y en el caso de la fibra óptica y la telefonía móvil, lo hacen por encima de 15% .

Y como conclusión de esta primera jornada del cabildo, Yezid García, exconcejal del PTC Alianza Verde, no lo pudo expresar mejor:

Si se hiciera un balance objetivo del cabildo abierto sobre la venta de la ETB, que convocado por la ciudadanía a través de más de 60.000 firmas y el Concejo de Bogotá, se realizó ayer en las instalaciones del Ildr, debe concluirse que la inmensa mayoría de las personas que intervinieron se opusieron con múltiples razones a la privatización de esta empresa distrital. La 'argumentación' del gerente Castellanos y el alcalde Peñalosa es superficial, engañosa y dogmática frente al credo neoliberal, pero son notorios cuatro hechos: A. Ese gerente es un provocador profesional cuando afirma irresponsablemente que 'la ETB es un buen negocio, pero para los sindicatos'. B. Es el único gerente en el mundo capitalista que se ufana porque su empresa perdió 200.000 millones de pesos en su primer año de gestión, el 2016. C. Como expresión de la 'democracia participativa', Peñalosa concluye: 'ustedes podrán estar en desacuerdo, pero



Yezid García, exconcejal de Bogotá y Secretario general (e) del PTC, interviene en el cabildo.

yo ya tomé la decisión de vender ETB'. (¡!) D. Peñalosa insiste en vender ETB para 'construir infraestructura social'. Ignora que lo que hace es vender infraestructura de comunicaciones, redes de fibra óptica, que llevan el saber y el conocimiento, para construir infraestructura de cemento para que transiten los Transmilenios .

Es decir, como consigna Enrique Santos Molano en una columna de El Tiempo, Peñalosa dejó claro que, "estando tomada la decisión" de vender la ETB, no había espacio para resolver dudas ni escuchar razones . Es decir, el inédito e histórico mecanismo del cabildo abierto era una necedad y el alcalde con su inveterado cinismo insiste machaconamente en mentir diciendo que los recursos producidos con la venta de la empresa irían para "la inversión social, en colegios y hospitales", pero lo que no dijo es que el 57% de los recursos de la privatización de la ETB y de la EEB irían para Transmilenio, según datos de la misma secretaría de Hacienda.

Para la segunda jornada del cabildo la administración redobló los esfuerzos para copar el auditorio con funcionarios distritales, a los cuales les hacían firmar planillas de asistencia. Los trabajadores y ciudadanos prácticamente quedaron en una proporción de dos a ocho y la in-

mensa mayoría de ellos quedaron a las puertas del Ildr, a los que no les quedó otra opción sino la de la protesta, a la cual se le respondió con el método usual del alcalde: el Esmad, el cual procedió con lo mejor que sabe: atropellar y golpear a los ciudadanos. Finalmente, por falta de garantías los sindicatos optaron por abandonar el cabildo y se unieron a la protesta en las afueras del recinto, sin antes lanzar al alcalde y a la mesa directiva del cabildo los birretes con los que los miembros de un colectivo de ciudadanos se habían presentado en alusión manifiesta a los falsos títulos universitarios del alcalde .

Aunque la figura del cabildo no es vinculante, logró el objetivo de socializar con la ciudadanía esta desafortunada feria de los activos de la ciudad. No solo por la agitación del tema en el proceso de recolección de las firmas y el impacto de las dos sesiones del cabildo, sino porque contribuye positivamente y profundiza en gran medida en el otro proceso ciudadano, el de la Revocatoria del Mandato. A la fecha van más de 300.000 mil firmas y la insatisfacción general de la ciudadanía no puede ser más evidente: todas las encuestas le dan más del 78% de insatisfacción.



La administración de Peñalosa copó, desde muy temprano, el auditorio del IDR con los funcionarios distritales.



Notas de Yezid García

Tomado del facebook

El drama de Peñalosa del 22 de marzo, en tres actos

ACTO I. A las 7 a.m. el alcalde inaugura el deprimido de la calle 94, da declaraciones y manda mensajes por las redes “sacando pecho” con grandes inexactitudes encaminadas “a ganar indulgencias con avemarías ajenas”. Ni el deprimido estuvo paralizado 10 años, porque en esa época aún no se había licitado; ni él se lo quitó al cartel de la contratación, fue la administración de la Bogotá Humana, fue Petro quien denunció al cartel y le dio caducidad al contrato; ni Peñalosa hizo los nuevos diseños, ni la financiación final, ni reinició las obras en el 2013. En diciembre de 2015, estaba ejecutada el 75% de la obra y el “señor” se limitó a concluirla e inaugurarla. Si los medios lo elogian por eso, háganlo, están en su derecho, pero no tienen derecho a desconocer la realidad de los hechos, y la realidad indica que el mérito principal, en este caso, fue de Petro y la Bogotá Humana.

ACTO II. A las 11:30 a.m. se estrellan varios carros en la Caracas con calle 76. Los policías de tránsito llegaron dos horas después del accidente. La explicación que se filtra a los medios es que no hay contrato vigente de mantenimiento de las motos y los agentes, sin medios de movilización, están en otros menesteres. Por lo menos, eso fue lo que informó el periodista Gustavo Gómez, de Caracol, peñalosista furibundo que indignado por el “monumental” trancón que se armó en ese concurrido sitio, tronó contra la administración distrital y se ensañó en el secretario de Tránsito de quién afirmó que le

había quedado grande no sólo la movilidad de Bogotá sino, en particular, la Avenida Caracas. Ese día los trancones en toda la ciudad y los retrasos, la incomodidad y el déficit de articulados en TransMilenio fueron noticias alarmantes que hicieron olvidar la inauguración del deprimido.

ACTO III. El Dane presentó el informe “Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2016”. Allí se registra el hecho muy preocupante de que la pobreza y la pobreza extrema crecieron en Colombia, después de doce años de reducciones relativamente significativas. Con razón, todos los medios pidieron explicaciones al gobierno nacional, especialmente si se tiene en cuenta que los efectos de la reforma tributaria y del bajísimo incremento del salario mínimo aún no están registrados en ese informe. Pero muy pocos denunciarnos que Bogotá, regida por el autoritarismo, la reducción de la inversión social y los negocios para urbanizadores y financistas, fue la única ciudad del país donde creció la pobreza multidimensional, pasó de 4,7% en 2015 a 5,9% en 2016; es decir, por este indicador que tiene en cuenta salud, vivienda, educación, trabajo y estado de la niñez y la juventud, hay 100.00 personas pobres más que en el año 2015. Ojalá no se diga ahora que el crecimiento actual de la pobreza en Bogotá es culpa de la administración anterior como acostumbra hacerlo, frente a todos los temas, Peñalosa y sus funcionarios. (23 de marzo de 2017).

¡A la calle, contra el alza en el transporte!

Peñalosa, a través de su Secretaría de Movilidad, anunció para el primero de abril el incremento de las tarifas del transporte público en Bogotá. El pasaje sube de \$2.000 a \$2.200 en TransMilenio y de \$1.700 a \$2.000 en Sitp, es decir, aumentos del 10% y 17% respectivamente. Esta es la segunda alza del transporte en los quince meses del gobierno del “señor”; desde enero del 2016 el TransMilenio ha subido 22,2% y el Sitp en 33,3%.

Además de menoscabar el ya precario ingreso de los bogotanos, esta medida tiende a congestionar la colapsada red vial de Bogotá. Al paso que vamos, será más barato y más cómodo para los ciudadanos de menores ingresos movilizarse en motos, con todos sus riesgos y consecuencias, que en transporte público. Esta es una situación técnica y políticamente absurda, pero así será mientras no revoquemos al peor alcalde que ha tenido la Capital. Peñalosa se niega a financiar parcialmente las tarifas del transporte público con fuentes complementarias como parafis-

cales y partidas presupuestales, tal como lo faculta la ley. Volvemos a lo mismo: los subsidios a la vivienda que permitieron hacer clientelismo a Vargas Lleras adjudicando casas son “buenos” pero los del transporte público a los bogotanos se castigan con multimillonarias e injustas multas como la que le puso el contralor Distrital a Gustavo Petro por 218.000 millones de pesos, todo por reducir las tarifas del transporte público.

Es hora de expresar en las calles el rechazo a las barbaridades de esta Alcaldía, en unidad de todos los sectores sociales afectados por sus medidas. Eso sí, que no sea el primero de abril, para no terminar cargando ladrillo al uribismo en su publicitada “marcha de los corruptos contra la corrupción”. Se me viene a la mente un mal pensamiento: ¿al subir las tarifas del transporte en Bogotá, a partir del primero de abril, no se estarán dando conscientemente elementos al uribismo para presentar su marcha como de protesta contra el alza de los pasajes? (15 de marzo de 2017).

Web: <http://partidodeltrabajodecolombia.org/>
 Facebook: Ptc Alianza Verde
 Twitter: PTC Alianza Verde / @PtcVerde

Pies descalzos (II)

INICIOS DE UNA POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Alberto Herrera

DIRECTOR DE LA BAGATELA

Con el triunfo de Alfonso López Michelsen en las elecciones de 1974, algunas agrupaciones políticas y gremiales, tuvieron expectativas de cambio. A los 38 días de posesionarse en el cargo, el presidente de Colombia convocó la "comisión tripartita", cuya supuesta función consistía en propiciar el entendimiento alrededor de la política económica a implementar. A la reunión estaban citados además del Estado, las agremiaciones de las clases poseedoras y las directivas de los trabajadores sindicalizados. Solo se escuchó la voz del anfitrión de Palacio: "El cambio de la sociedad colombiana, que hemos prometido, queremos adelantarla en medio de la calma política y del consenso"¹. Cabe recordar que por aquella época los representantes de los trabajadores eran las camarillas de UTC y CTC que siempre respaldaron las políticas oficiales, y el Comité Ejecutivo de la Cstc, que había recibido de parte del nuevo gobierno la personería jurídica dos semanas atrás, a la cual la Confederación tenía legítimo derecho desde hacía diez años, y que dejó una constancia en contra de la propuesta presidencial.

No había opción para vacilación alguna, el inspirador del "mandato claro", el antiguo disidente del Frente Nacional, era el continuador del régimen bipartidista, así hubiera llegado al Palacio de San Carlos con más ruido, prestigio y votos que quienes le antecedieron en el mando. Y desafiante ante un pueblo, desde el principio bendijo el carnaval de las alzas, presentó una represada reforma tributaria, adornó el paraíso de la usura y poco demoró en implantar el Estado de sitio; a la par su popularidad bajó sin parar.

Y fue la promesa que hizo al presidente Gerald Ford en la visita a Estados Unidos, la que confirmó que López no se apartaría del continuismo bipartidista: "En la débil medida de nuestras fuerzas, señor Presidente, estamos dispuestos a acompañar a los Estados Unidos, dentro de nuestra amistad tradicional, a propiciar el cambio, a admitir las realidades, a reconocer derechos, a la par que asumir responsabilidades, conservando lo que sea digno de conservar y reconociendo la obsolescencia de lo que debe ser sustituido"².

No demoró en aflorar la protesta popular. Las huelgas de trabajadores se multiplicaron. Los campesinos en su derecho a poseer tierra, adelantaron invasiones a propiedades de los terratenientes y surgieron los paros cívicos en pequeñas y grandes poblaciones.

Se configura la táctica de los pies descalzos

El PTC, por su parte, en el debate electoral que unió a López con la primera



En la campaña electoral de la UNO en 1974, Preside el acto en san Juan Nepomuceno, Francisco Mosquera, Hernando Echeverri Mejía, Marcelo Torres, Gustavo Duncan, Alberto Herrera y Orlando Ambrad

magistratura del Estado, logró avanzar considerablemente en su propósito de extenderse y vincularse a las más amplias masas populares. Obtuvo una curul en la Cámara de Representantes y un puesto en los concejos de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Pasto, entre otros. ¿Qué contribuyó a este avance? Ya en 1972 algunos cuadros se habían desplazado a ciudades intermedias para atender la actividad política y las elecciones, constituyéndose en una valiosa experiencia. En 1974 el reto era inmensamente mayor y había que aprovechar el momento, pues era el fin constitucional del Frente Nacional, y se había conformado una coalición de izquierda, la UNO, que lucía atractiva a los ojos de los colombianos. El otro factor no menos importante, era que se contaba con unos jóvenes que venían de participar en la batalla estudiantil de los años setenta, que habían planteado y logrado justas y adecuadas transformaciones a la cultura y a la educación tradicional. Adquirieron capacidad y experiencia en la lucha, y su rebeldía, lejos de apagarse por las expulsiones, la persecución y la represión oficiales, crecía y buscaba nuevos escenarios. Y se da la afortunada coincidencia: el compromiso electoral y el deseo juvenil de una generación empeñada en llegar más allá de lo realizado, en contribuir en otros campos a la transformación de la sociedad. Ante el llamado del Partido a extenderse hacia el campo, decenas de jóvenes dejaron la vida citadina y salieron con la mente abierta y las manos limpias, a confrontar sus ideas con grupos poblacionales

ajenos a sus experiencias anteriores, en zonas y sitios desconocidas, con su arsenal ideológico. El desafío era incommensurable y solo una voluntad férrea y un espíritu revolucionario podían permitir el éxito de la operación. En el balance posterior al debate electoral se evidenciaron los beneficios y avances de esta orientación y se decidió profundizar aún más la directriz: "deshacerse de todas las ataduras, quitarse los zapatos para meterse al barro". A dicha política se le conoció como los pies descalzos.

¿Por qué al campo?

Esta decisión política tomada por un partido de izquierda desarmado, es un reconocimiento al campo y a la importancia de tener representación y fuerza en este terreno, y muy poco se tenía. Además el campesinado es el mejor amigo y aliado de los obreros, y si no se llega a una estrecha alianza entre los dos sectores sociales, nunca habrá una revolución. Hace 43 años, época de los hechos aquí narrados, casi el 40% de la población colombiana vivía allí, en el campo. La tarea era ganarse el corazón de los campesinos y quedarse con ellos.

Y también porque en 1971 llegó a su pico una nueva batalla por la tierra, la iniciativa la tomaron los campesinos que, movidos por su subsistencia, invadieron latifundios para trabajar. La respuesta oficial quedó consignada en el Pacto de Chicoral en 1972 que protegió aún más a la propiedad terrateniente. El campo ha sido un escenario de violencia por más de 60 años y sin paz no se desarrollará.

Elecciones 1976: escenario propicio para la oposición

Con el telón de fondo: crisis económica, descomposición social y bancarrota del "mandato de hambre" se iban a celebrar las elecciones de 1976. Esta batalla para las fuerzas revolucionarias se llevaría a cabo en circunstancias verdaderamente favorables en comparación a las de 1974, y en particular para el PTC "que salió por completo del cerco político tendido a principios del período anterior por las más variadas fuerzas enemigas, triplicó sus efectivos, consolidó la cohesión, la unidad, la disciplina y la eficacia de sus filas y se encuentra en capacidad de realizar su debate electoral en todo el país, incluyendo algunos territorios nacionales. No tenemos pues, como en 1974, la disyuntiva apremiante de que o constituíamos un frente electoral de izquierda o no podíamos garantizar ningún éxito en las elecciones. Sin embargo, desde el punto de vista general de las grandes necesidades que encara la revolución colombiana y de la probabilidad de propinarle una contundente derrota a la reacción, nuestras fuerzas continúan siendo débiles y un frente revolucionario, ahora, acrecentaría notablemente nuestras perspectivas halagüeñas"³.

Para esa época, el "mandato claro", expresión de la coalición liberal-conservadora gobernante afrontaba múltiples dificultades. El "consenso" que pidió para gobernar el antiguo disidente del Frente Nacional, poco sirvió y la inconformidad creciente enfrentó la iniciativa de los





partidos tradicionales en esta campaña electoral.

Alrededor del mundo

Simultáneamente en el mundo se darían otros acontecimientos, que sumados a los ya mencionados en la anterior crónica (Guerra Fría, Revolución Cubana, Mayo 68, protesta contra guerra en el sudeste asiático, enfrentamiento URSS-China) conviene recordarlos y tener en cuenta: el 17 de abril de 1975, después de más de un siglo de guerrear contra la dominación colonialista y luego contra el imperialismo norteamericano, Camboya logró por fin su independencia, al igual que Vietnam del Sur el 30 del mismo mes, y Laos el 3 de diciembre, constituyéndose en naciones soberanas. El histórico triunfo fue noticia mundial y alentó a los pueblos en su lucha por liberarse de cualquier yugo opresor.

Los pies descalzos se abren camino

Mientras la nación se debatía en medio de grandes contrastes y contradicciones, los pies descalzos adelantaban su labor, parecía que nada los detendría. La presencia de estos seres "extraños" en las regiones a las que se llegó, impactó. Los conocidos eran pocos y su permanencia en el campo se logró por la acogida de familias que les abrieron las puertas de sus casas, pues encontraron en ellos, una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, de enriquecer sus conocimientos, de romper las limitaciones de la vida campesina. Solo así se puede explicar la presencia allí de los descalzos por 13 años. Su reto no estaba exento de dificultades. Atreverse a señalar a la manguala liberal-conservadora como responsable del atraso y la miseria de los colombianos, produjo simpatías y enemidades. El soporte dado a la actividad de los descalzos por una organización política de los trabajadores, así fuera desconocida, la legitimaba, no era el capricho de unos pocos sino la decisión de un partido. En todo caso, la llegada al campo puede concluirse como un encuentro ganancioso para las partes involucradas.

Ya en el terreno se reafirmó la necesidad de crear organizaciones independientes que bregaran por remediar las inmensas carencias y limitaciones que tiene la vida campesina. La lista era interminable y la lucha colectiva y unificada empezó a dar frutos. El propósito por recuperar tierras para trabajar era prioritario en las zonas de grandes terratenientes. Entre más alejadas de los centros urbanos donde no existía presencia del Estado, las necesidades eran mayores. Los descalzos se propusieron llegar hasta el último habitante, porque además comprendieron que un partido con raíces allá, sería una verdadera fuerza nacional y tendría asegurada su existencia.

La forma de vida, su relación con las gentes, sus aportes, la construcción de organizaciones campesinas, sus logros y los problemas de adaptación, seguridad y subsistencia serán tema de la siguiente crónica de los descalzos como protagonistas.

Notas

- 1 Alfonso López Michelsen. *Radiografía de una situación y plan de estabilización. Discurso ante la "comisión tripartita*, 14 de septiembre de 1974. Ediciones del Banco de la República, 1974, pág. 33.
- 2 *El Tiempo*, septiembre 26 de 1975.
- 3 Contra el "mandato de hambre" ¡a la carga!, editorial *Tribuna Roja*, feb 1976, pág 9.

Los estudiantes se movilizan en la capital

CONTRA LAS MEDIDAS DE PEÑALOSA



Movilización de los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra, el 13 de febrero, en protesta contra la mal llamada jornada única. Este movimiento contó con el acompañamiento de Francisco Castañeda, edil de Kennedy y dirigente del PTC.

Natalia Carolina Zárate Torres

DIRIGENTE JUVENIL
DEL PTC EN BOGOTÁ

Después de las importantes movilizaciones realizadas por la juventud y el estudiantado colombiano durante el final del semestre pasado, las cuales contribuyeron de manera decisiva a presionar la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, ha empezado el 2017 con un alentador y positivo resurgir de estudiantes y sectores de la comunidad educativa, que demuestran el malestar y rechazo a las políticas adoptadas por el gobierno de Peñalosa y que deterioran las condiciones para una educación de calidad.

Se han presentado acciones de movilización, denuncias, asambleas permanentes e inconformismo generalizado de los estudiantes en algunos colegios de la ciudad como el Nicolás Esguerra en Kennedy, Tesoro La Cumbre en Ciudad Bolívar, San Benito Abad y el Instituto Técnico Industrial Piloto en Tunjuelito y Divino Maestro en Usaquén, entre otros, todas estas contra la arbitrariedad de la política educativa distrital, el rechazo a la imposición e improvisación de un gobierno déspota.

Peñalosa insiste en la entrega de colegios públicos a concesionarios privados, y nuevos conceptos como la jornada única sin garantías, ya que la pretenden imponer sin las condiciones necesarias, como espacios para suministrar alimentación a los

estudiantes o recursos que les permita el bienestar estudiantil (comedores, hornos, cocinas, etcétera), zonas de recreación y deporte para que haya mejor aprovechamiento del tiempo libre, políticas de continuidad académica; recurso humano docente con condiciones laborales dignas y un componente pedagógico acorde con las exigencias de los educadores colombianos, además de situaciones de persecución de parte de los directivos en algunos casos. Estas movilizaciones tienden a generalizarse aún más frente a la actitud déspota para escuchar a docentes, padres, estudiantes y funcionarios de los establecimientos educativos.

Frente a esta situación, el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia (Consec), organización compuesta por representantes y líderes estudiantiles, ha venido adelantando una intensa actividad de acompañamiento en estas movilizaciones y protestas, y ha realizado acciones para contribuir al proceso de organización de los estudiantes en sus instituciones, a través de la constitución de sus gobiernos escolares, para lo cual se vienen desarrollando seminarios, conversatorios sobre la importancia de la organización estudiantil, del trabajo colectivo y el fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles como un aporte en la lucha por el desarrollo de la nación y la ciudad, además de la conquista de unas condiciones en el terreno de académico que permitan y le abran paso a una educación pública, científica y democrática.

Como lo han planteado los dirigentes gremiales del profesorado, compañeros

agrupados en Renovación Magisterial, "las políticas regresivas del alcalde Peñalosa han obligado a la comunidad educativa a movilizarse por el derecho a la educación de calidad y por el respeto a la profesión de los docentes, que se esfuerzan por obtener sus títulos académicos con dedicación y honestidad, para impartir sus conocimientos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el marco de un ambiente escolar afectado por la creciente pobreza y desempleo de miles de padres de familia y agredidos por la violencia y la inseguridad, asuntos sobre los cuales la administración distrital muestra su incompetencia, como a diario lo registran los medios de comunicación".

El Consec cree firmemente que la lucha por la educación pública, científica y democrática en Bogotá hace parte de la pelea nacional adelantada por el estudiantado contra la política educativa del gobierno de Santos, que conspira contra la existencia misma de la educación.

Por tales razones, una forma de aportar a esta lucha de resistencia será promoviendo la revocatoria del alcalde Peñalosa, porque como si los motivos de descontento por la aplicación de la política educativa no fuesen suficientes y el deterioro de los avances educativos conquistados en los últimos dos lustros en Bogotá sean tan evidentes, es sumamente importante participar de la tarea que se adelanta hoy por parte de diferentes organizaciones de carácter ciudadano, político y social relacionada con la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá.



Colegio Divino Maestro en Usaquén.



Instituto Técnico Industrial Piloto.



Colegio San Benito Abad en Tunjuelito.

La política industrial de Trump

PROTECCIÓN TOSCA E INÚTIL EN UN IMPERIO EN DECADENCIA

Edmundo Zárate

PROFESOR UNIVERSITARIO,
PHD EN ECONOMÍA

El actual andamiaje económico de Estados Unidos se soporta en la llamada deslocalización de la industria y, la otra cara de la moneda, en el gran peso que tiene el sector financiero en la producción total del país en comparación con el manufacturero. El presidente Trump anuncia que tomará medidas para recomponer el sector real de la economía, pero la promesa tendrá muchas dificultades para materializarse.

Deslocalización, maquilas y TLC

La deslocalización de la industria es el mecanismo conocido comúnmente como maquila, cuya existencia se remota a la década de 1960 en las relaciones entre Estados Unidos y México, pero cuyo auge se dio desde la década de 1990. El asunto no es otra cosa que instalar factorías en países atrasados, con bajos salarios, para la producción total o parcial de automóviles, maquinaria pesada, computadores, aviones, celulares, textiles, alimentos procesados, entre otros muchos productos. Se entiende, financiadas en gran medida con capitales gringos que multiplican así sus ganancias a costa de los trabajadores de los países subdesarrollados.

Este desplazamiento ha creado una intrincada red de producción mundial de manera tal que las viejas marcas nacionales “hecho en Estados Unidos” o “hecho en México”, han perdido sentido y hoy se habla de “hecho en el mundo”. Es por eso que las promesas del presidente Trump de reinstalar en su país todas las factorías será imposible de cumplir, pues, ante todo, significaría obligar a sus empresarios a perder la gran ganancia proveniente de los bajos salarios que pagan en las factorías regadas por el mundo subdesarrollado.

Para el buen suceso de las maquilas, el gobierno gringo impulsó en el mundo el Consenso de Washington y en América Latina intentó crear una gran área de libre comercio, el Alca, a mediados de los años 90. Pero la oposición encabezada por Brasil evitó la materialización de esa política imperialista.

Entre tanto la Casa Blanca, para atender las negociaciones con sus vecinos, Canadá y México, puso en marcha por la misma época un mecanismo de integración que se conocería como los tratados de libre comercio, TLC. Con ese prototipo andando, y ante el fracaso del Alca, la política fue extender los tratados a toda Latinoamérica y el sudeste asiático.

Los TLC con los países latinoamericanos tuvieron oposición en estas tierras siendo mayor o menor dependiendo de la resis-

tencia que ofrecieron la clase obrera y los productores nacionales. Como es sabido, también hubo oposición de sindicatos de trabajadores gringos y hasta de una parte del partido Demócrata.

La conjunción de esas fuerzas hizo que la política fuera imponiéndose en zigzag. En el caso de Brasil sencillamente ni siquiera hubo negociaciones para un eventual TLC, mientras que Chile —sin sindicatos después del terror pinochetista y sin fuerte industria después de 30 años de aplicación brutal del modelo neoliberal conocido como Escuela de Chicago— fue el segundo país en rubricar uno en el 2005, después de México.

En el cuerpo de estos tratados se pueden distinguir varios temas. Primero, no necesariamente el más importante, es la rebaja de aranceles. Pero además está acabar con las barreras no arancelarias al comercio, (obstáculos técnicos al comercio) tales como requisitos sanitarios o medioambientales, prelación para los productores nacionales, prohibición de importaciones por consideraciones políticas, acatamiento (o sea, pago) de los derechos de autor, entre muchos otros.

También está el capítulo de las garantías a los inversionistas, pero no solo a los que ponen maquilas sino a los que hacen cualquier tipo de exportación de capital como los bancos, las aseguradoras o los corredores de bolsa.

TLC a la medida Trump

Con estos datos en mente se puede vislumbrar el rumbo que tomará la amenaza de Trump de que elevará los aranceles para reinstalar las fábricas en su país. Ante la imposibilidad objetiva de lograr el retorno, lo que pondrá en marcha será la renegociación de los TLC ya existentes para obtener mejores condiciones para sus capitalistas.

Al primer gobierno al que amenazó, ya respondió. En efecto, el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunciaron que su país está dispuesto a renegociar el TLC. Ni el más optimista podrá esperar que en algo mejoren las condiciones para este país en la nueva versión que salga.

Un punto en los tratados es el llamado “normas de origen”. Consiste en que, por ejemplo, productos elaborados en México con materias primas o intermedias procedentes de Estados Unidos o de México, pagan impuestos menores (o no pagan) al venderse en Estados Unidos. Caminando por los intersticios de los párrafos, inversionistas chinos y japoneses (por ejemplo, la Nissan) hacen uso de esta norma para hacer aparecer como mexicanos productos que se han originado en Asia. Se ha dicho que ese será uno de los puntos a renegociar.



Es una guerra comercial no declarada contra los asiáticos, que favorece a los inversionistas norteamericanos, pero que no significará dejar de producir en México (o cualquier otro país con maquilas gringas), ni tampoco implicará subirles los impuestos a los fabricantes gringos en el extranjero, sino a los no gringos.

En este punto no hay que perder de vista otro hecho: medido en capacidad de compra y en número de compradores, el primer mercado mundial es la Unión Europea, y Estados Unidos está en segundo lugar, pero, además, es mucho más autárquico el mercado gringo que el europeo. Dicho de otra manera, en cuanto al comercio exterior lo primordial es lograr acceder al mercado europeo, más que al gringo. De esa manera, un fabricante como Apple o Microsoft o Ford podrá seguir produciendo en México o en Portugal para vender en Europa, a pesar de los obstáculos que intente poner Trump.

En el caso de las otras dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y Argentina, que se negaron a firmar tratados dada su relativa fortaleza industrial y agropecuaria, Trump cuenta ahora con dos dóciles presidentes (hace pocos días el presidente peruano Kuczynski llamó “perritos falderos” a todos sus colegas de la región, con la excepción, dijo, de Maduro). Uno de los primeros actos de gobierno del argentino Macri fue pagarle a los fondos buitres los miles de millones de dólares que el país se había negado a reconocerles durante 15 años.

En el resto del mundo vale la pena destacar el TLC de Estados Unidos con Corea del Sur. Puesto que los salarios no son tan bajos como los de Latinoamérica, ese TLC no tiene que ver mucho con maquilas sino con normas arancelarias y no arancelarias mutuas y garantías a la inversión.

Impuestos

Otro anuncio de Trump a favor de la industria tienen que ver con el tema impositivo.

El impuesto a las empresas es superior a otros países desarrollados como Alemania, Gran Bretaña y Japón, pero Trump ante todo usa como punto de referencia a Irlanda, una especie de paraíso fiscal (por esta razón ha sido multado por la Unión Europea), para decir que en su país las tasas no son competitivas y que deben bajar para atraer capitales.

El solo hecho de que le sirva de referencia Irlanda y no los países nórdicos que tienen tasas mucho más altas, ya habla por sí solo de las intenciones presidenciales y de la gran carnada que ello significa para los billonarios gringos. Es sabido que varias multinacionales, empezando por la muy conocida Apple, tiene su residencia fiscal en ese país para evadir impuestos en Estados Unidos, y que, al igual que muchas otras, tienen cientos de miles de dólares en efectivo en cuentas en paraísos fiscales, según estudios adelantados entre otras por Mariana Mazzucato.

La rebaja de impuestos trae un efecto importante, la escasez de recursos para atender el gasto público. Hoy Estados Unidos tiene un abultado déficit fiscal que subsana a través de un fuerte endeudamiento externo. Al hacer la rebaja impositiva y sumársele el anuncio de que emprenderá una gran inversión en obras públicas como carreteras, ferrocarriles y puertos, sin contar lo que invertirá en las fuerzas armadas, es evidente que procederá a recortar los gastos sociales, empezando por el de salud (conocido como el Obamacare). En cuanto a educación, su secretaria del ramo ya anunció que daría mucha mayor prelación a los que en Colombia llamamos colegios en concesión.

La rebaja de impuestos ocurrirá a no dardarlo, pero ese factor no será lo suficientemente disuasivo como para que reinstalen las fábricas en Estados Unidos, pero sí para seguir consolidando el respaldo de la más rancia oligarquía gringa.

AGENDA DEL SINDICALISMO EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Fabio Arias

DIRIGENTE DEL PTC

En los últimos 30 años la perversa combinación, de una parte, de la aplicación del modelo neoliberal, bajos salarios, menos sindicatos, y de otra, la violencia de que ha sido víctima el movimiento sindical producto del conflicto armado en nuestro país, han ocasionado una pérdida significativa de los derechos laborales de los trabajadores y de la estructura organizativa y de afiliación de los sindicatos.

En el acuerdo de paz en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 se establece que deben otorgar plenas garantías a la organizaciones sociales y a la movilización social y a la protesta.

La pertinencia de éstas propuestas normativas laborales en el contexto de la implementación del acuerdo de paz, se confirma además con elementos que confluyen en el fortalecimiento de la democracia y la modernización de las relaciones laborales, a partir de las siguientes dinámicas:

1. Concorre gran parte de la agenda que han impulsado en los últimos años las

organizaciones sindicales, relacionada con formalización laboral, las garantías para el ejercicio de la libertad sindical, y la reparación colectiva para el sindicalismo.

2. Coincide con las exigencias internacionales derivadas de los tratados de libre comercio y de compromisos del Estado en materia de garantía efectiva de los derechos laborales y sindicales (Estados Unidos, Canadá, Parlamento Europeo, Oede, y la OIT) particularmente, dirigidas a la ejecución de acciones y políticas que permitan mejoras inmediatas en varios temas laborales (reforzamiento de la capacidad de investigación y sanción de los inspectores de trabajo, limitación a todas las formas de intermediación y tercerización laboral ilegales, derogatoria del decreto 583 de 2016, control al abuso de los contratos temporales, protección efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, prohibición de los pactos colectivos, eliminación de los contratos sindicales, ampliación de los niveles de la negociación colectiva, incremento de acciones contra la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas y mantener la seguridad y protección de los dirigentes sindicales,

garantizar el ejercicio de la protesta y la huelga, etc.).

3. Reconocimiento por parte del Estado, que el sindicalismo como movimiento social históricamente ha sido víctima y existe una obligación de reparación integral, para lo que se ha creado la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva del sindicalismo (decreto 624 de 2016), la cual debe instalarse e iniciar sus labores. Este aspecto también tiene desarrollo en el Acuerdo Final en el punto 5.1.3.3.3.

En el marco de los mencionados acuerdos, se establece de que deben desarrollarse proyectos normativos. Así, el movimiento sindical ha presentado un proyecto de ley estatutaria ante las instancias que ha determinado el acuerdo convocadas por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y operadas por Viva la Ciudadanía, el CINEP, y Oro por Colombia. Se han desarrollado 6 encuentros regionales y se desarrollará uno nacional en este mes de marzo del cual deberá salir el Proyecto de ley estatutaria que la representación del conjunto de las organizaciones sociales discutirá con la Comisión de Seguimiento Impulso, Verificación e Implementación de los Acuerdos de Paz - CSIVI.

El proyecto de ley estatutaria del movimiento sindical fundamentalmente reclama que las garantías como organización social están vinculadas a lo que la OIT ha llamado las libertades sindicales es decir el tema de derecho de asociación, de negociación y de huelga en ese sentido hemos presentado un articulado que desarrolla estos tres temas, prohibición de los pactos colectivos y contratos sindicales, negociación colectiva por rama o por nivel, derecho a la huelga en el sector público esencial, puesto que el gobierno a pesar de múltiples exigencias y demandas, que ha hecho el movimiento sindical durante mucho tiempo y que ha acompañado diversas organizaciones internacionales entre ellas la OIT desafortunadamente no las ha cumplido y en materia de derecho a la movilización, de garantías a la movilización social y a la protesta estamos solicitando la derogatoria de los artículos restrictivos de la ley de seguridad ciudadana y del código de policía que permiten la persecución y la restricción a este pleno derecho y de otra parte demandar del estado de que haya verdaderas sanciones y penalización para quienes desde el gobierno y desde los empresarios violen los derechos a las libertades sindicales y a la movilización y a la protesta.

Consulta ambiental victoriosa

CAJAMARCA TRAZÓ EL CAMINO

REDACCIÓN LA BAGATELA

Acogiéndose a los principios establecidos por la Ley 1757 de 2015, el pueblo de Cajamarca el pasado 26 de marzo dijo No a las pretensiones expropiadoras de la transnacional Anglo Gold Ashanti. Ante la pregunta con la cual se convocó al municipio a consulta popular: ¿Está usted de acuerdo Sí o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 votantes, el 97%, rechazó el proyecto La Colosa que busca extraer oro en uno de los proyectos mineros más grandes del mundo, y que en su extracción afectaría de manera considerable los ecosistemas de páramo.

Con esta decisión, y dado el carácter de obligatoriedad que impone la normatividad vigente para este tipo de consultas, el proyecto minero no podrá realizarse. Lo ocurrido durante la jornada electoral demuestra que el desarrollo sustentable es posible y realizable con la participación democrática de las comunidades, algo que impone, sin duda, un freno al capital extranjero y a las locomotoras que impulsan el actual modelo extractivista, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente.

Ante la decisión democrática del pueblo de Cajamarca, el gobierno de manera



pronta ha buscado desconocer los legítimos resultados. A nombre de la seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país, el gobierno de Santos y el ministro de Minas y Energía desconocen que la consulta cumplió a cabalidad los dos principios básicos de la consulta: superar el umbral de participación de al menos 5.438 electores y la mayoría simple dentro de estos, de lejos obtenida. El carácter de la decisión tomada es de obligatorio cumplimiento y su aplicación se hará mediante "una ley, ordenanza, un acuerdo o una resolución local" que se expedirá de manera inmediata en el periodo de sesiones inmediatamente siguiente o, de no ocurrir esto, a través de un decreto con fuerza de



ley, acuerdo o resolución local expedido por el presidente de la República.

Declaraciones por las redes

Yezid García (Facebook): El pueblo del municipio tolimese de Cajamarca acaba de darle una lección de sabiduría y dignidad a Colombia; pero, sobre todo, al gran capital extranjero vinculado a la explotación, sin tasa ni medida, de los recursos naturales no renovables de los países pobres del mundo. Y la victoria es del pueblo, de toda Colombia, de la vida, del agua, del ambiente, de la dignidad y del trabajo duro de miles de campesinos y trabajadores agrícolas. ¡Gracias, gracias Cajamarca por mostrar el camino!

Gustavo Petro (@petrogustavo): Cajamarca ha dicho que cuando se expresa el Poder Constituyente en el territorio: el poder de decisión de la ciudadanía que lo habita, se construye la Vida, la Paz y la Democracia.

Manuel Rodríguez B. (@manuel_rodb): La derrota que propinó la comunidad de Cajamarca al poder gubernamental de Bogotá y a la superpoderosa Anglo-Gold es un hito histórico.

Claudia López (@ClaudiaLopez): Excelente noticia Cajamarca, Tolima hoy es un ejemplo para el país, con 6.165 votos le dijo ¡No! a la minería en su departamento. ¡Esto es lo que sucede, cuando la ciudadanía se informa, se une y se empodera!

Actividades del Partido

POR LOS REGIONALES DEL PTC

Dentro de la continua labor de organización y crecimiento del Partido y en particular en desarrollo de la orientación dada por el Comité Ejecutivo del PTC de atención a la juventud y los trabajadores, a continuación reseñamos algunas de las actividades que en este sentido vienen adelantado los regionales, para cumplir con esta estratégica tarea política:

Atlántico

En diciembre, con la asistencia de Yezid García, secretario general (e) del PTC se adelantó una reunión del regional del Atlántico que contó con la presencia de antiguos dirigentes revolucionarios de la región Caribe como Jorge Iván Zapata, Daniel Trespalacios y Antonio Mendoza. La reunión, además de despedir el año, trazó las tareas para desarrollar en los albores del año 2017, que abarcarán no solo el departamento del Atlántico sino toda la costa Norte. Con una asistencia de cerca de 50 militantes, la reunión evidenció el crecimiento del Partido con la incorporación de nuevos militantes provenientes en lo fundamental del movimiento sindical y juvenil (foto 1).

Para dar inicio a las actividades de crecimiento se realizó el 8 de febrero en Barranquilla, una conferencia de la compañera Consuelo Ahumada, miembro del Comité Ejecutivo y acreditada economista e historiadora, que versó sobre el tema de la Reforma Tributaria. Asistieron a esta conferencia todos los militantes del regional del Atlántico, un buen número de dirigentes sindicales e invitados especiales como el exrector de la Universidad del Atlántico Antonio Vallejo, Jorge De Oro y Jorge Iván Zapata de la Nueva Tendencia, Astrid Coronado, dirigente de la Adea y Juan Núñez del partido Alianza Verde.

Con un seminario de carácter laboral y político, el pasado 6 de marzo se realizó exitosamente el encuentro del frente obrero del PTC en el Atlántico. Asistieron cerca de 50 trabajadores, entre los que se destacan directivos: Uso-Barraquilla, Sintranavierra, Sintrametal, Sintracorpacero, Ascontrol, Aceb, Aspu, Sintraofiuaa, Asitpoda, Asproul, Adea, Adeba y dos directivos de la CUT Atlántico, Everilda Barraza y Eduardo Castillo. Por conflictos en sus frentes de trabajo no pudieron asistir trabajadores del sector eléctrico (Sintraelecol) y de la Unión Portuaria. Para coordinar tareas a nivel de la costa se hicieron presentes los compañeros Luis Arrieta,

secretario político del PTC en Magdalena, José Barros de la dirección regional del PTC en Bolívar y Fredy Bolívar del zonal de Magangué.

Las principales conclusiones de este seminario fueron:

1. Se formalizó la nueva Comisión Obrera del PTC Atlántico. 2- Continuar el proceso de formación. 3- Participar en las actividades programadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 4- Apoyar los plantones programados por los compañeros de Ascontrol Atlántico. 5- Coordinar con los compañeros de Bolívar, Magdalena, Guajira, Sucre y algunos frentes nacionales con influencia en la región Caribe, para fortalecer el trabajo sindical en toda la costa (foto 2).

El martes 7 de marzo se realizó la concentración de los empleados de las contralorías nacional, departamental y distrital, en contra del proyecto de ley que cursa en el Senado que pretende eliminar el control fiscal territorial. Este evento estuvo liderado por los compañeros de Ascontrol Atlántico y contó con el acompañamiento de la Comisión Obrera Regional y de la Dirección Regional del PTC en el Atlántico (foto 3).

Jupa Atlántico

En Barranquilla el domingo 12 de marzo se realizó, con un rotundo éxito, el encuentro de la juventud y se logró conformar la nueva dirección regional de la Jupa del PTC Atlántico. El encuentro contó con la asistencia de 40 jóvenes provenientes de colegios, universidades, trabajadores y municipios del Atlántico. El encuentro, eligió una nueva dirección juvenil integrada por once compañeros y compañeras. Definió, además, que los frentes básicos para atender son los siguientes: Universidad del Atlántico, universidades privadas, secundaria, Sena, cultura, deportes, ambiental, nuevas ciudadanías, sindical, municipios, comunal y comunitario. Así mismo, se definió impulsar la reactivación del Consec, y la continuación del proceso formativo a través de la realización de un diplomado sobre la problemática juvenil y su relación con la política, en el mes de abril.

Se destaca la presencia de nuestro compañero recién elegido representante por los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, Glenn Martínez y de los amigos Germán Zuluaga, quien fue nuestro candidato al Consejo Superior de esta misma universidad obteniendo más de mil votos (perdió

sólo por 27) y José Redondo, exrepresentante del Consejo Académico de la misma (foto 4 y 5).

Bolívar Magangué

Jalonado por el secretario regional del Atlántico, Ubaldo Enrique Meza, de acuerdo al plan de coordinación para la región Caribe, el jueves 11 de febrero se realizó un importante evento académico y político con los militantes, amigos y simpatizantes del PTC en Magangué. El evento se desarrolló con las conferencias de Consuelo Ahumada, tituladas: "Situación internacional y posconflicto" y "La política económica del presidente Santos", la conferencia de Alberto Herrera director de La Bagatela sobre "Historia del PTC y los Pies Descalzados en el Sur de Bolívar", además de la conferencia de Ubaldo Enrique Meza sobre "Los acuerdos de paz y la región Caribe". Cabe resaltar que este evento ayudó en forma grande al fortalecimiento organizativo y al crecimiento del zonal del Partido en Magangué (foto 6).

Sucre

Luego del evento en Magangué, la tarea continuó en Sincelejo, donde se desarrollaron dos importantes reuniones los días 10 y 11 de febrero, en la sede de la Asociación de Educadores de Sucre, Ades. En estas dos reuniones se desarrollaron las conferencias de Consuelo

Ahumada, Alberto Herrera y Ubaldo Enrique Meza y culminaron con la constitución de la Comisión Obrera Regional, integrada por compañeros de Aceb, Uso, Ascontrol y el magisterio. Es clave destacar el acercamiento de viejos luchadores del magisterio como Gabriel Villegas, Roberto Martínez y Alberto Moreno (El Quira), así como el liderazgo de compañeros de la dirección nacional de Ascontrol, quienes garantizaron la realización del cursillo (foto 7).

Quindío

El 25 de febrero se realizó en Armenia un seminario político convocado por la dirección regional del PTC en Quindío y orientado por los compañeros de la dirección nacional del PTC y la Jupa, Consuelo Ahumada, Raúl Moreno y Daniel Terán. Asistieron, un buen número de compañeros de Armenia, Quimbaya, Calarcá y Pereira. Hay que resaltar la gran colaboración de la Junta Directiva de Aspuc. Cabe mencionar la buena asistencia de las mujeres, compañeras y amigas del PTC, encabezadas por la compañera Carolina Orozco y la participación de jóvenes en proceso de vinculación al partido.

La temática y los respectivos conferencistas fueron los siguientes: 1. La situación nacional y la táctica del PTC durante el go-





bierno de Santos. 2. El gobierno de Trump y su posible impacto en América latina. 3. ¿Sabe usted qué es el materialismo dialéctico e histórico? 4. La participación de los jóvenes en la lucha por una educación pública, científica y democrática.

Se programaron nuevos seminarios el próximo 31 de marzo y el 1º abril, con participación principalmente de maestros, cuya temática será desarrollada por el compañero Miguel Ángel Pardo, responsable del trabajo magisterial (foto 8).

Antioquia

El regional del PTC en Antioquia viene impulsando desde el año pasado las "Cátedras de la paz", en ese sentido y al redor de la campaña por el Sí en el plebiscito recorrieron buena parte del departamento. Ahora, defendiendo los acuerdos de paz, han continuado con esta labor haciendo énfasis en la población joven y estudiantil. El ejemplo destacado lo está dando el estudiante de bachillerato Alexis Palacios del colegio Rodrigo Arenas Betancur de Medellín. Antes de la terminación del año lectivo se realizaron cinco sesiones, este año iniciamos la Cátedra de la paz combinada con Cátedra contra la corrupción. Concentrados esta vez solo con grados 11 y 10 de ese colegio (foto 9).

Estas cátedras y la actividad que viene desarrollando el partido en Antioquia dentro de la juventud hicieron que el compañero Juan Diego de los Ríos, quien lleva liderando un grupo de más de 20 líderes de casi todas las universidades de Medellín, (U de Medellín, Pontificia Bolivariana, Politécnico, Pascual Bravo, ITM, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Luis Amigó, etc.) bajo el nombre de Grupo Integral de Jóvenes, enfocados particularmente en el tema territorial y en las problemáticas, necesidades y bienestar de sus respectivas comunidades, convocara a un seminario para que este grupo se integrara al PTC. Esta decisión fue aprobada unánimemente, luego de que analizaron las alternativas políticas para la juventud y encontraron en el PTC la expresión más acertada y más fiel a las necesidades del país y del pueblo colombiano.

El seminario se realizó el pasado 5 de marzo gracias al joven compañero Daniel Botero y contó con conferencistas de primer nivel entre los que se destacan los historiadores Esteban Morales y Juan Bonilla, los profesores de universitarios y dirigentes del PTC Javier Sánchez y Ricardo Torres, quienes adentraron al auditorio en la historia política de Colombia, la historia del PTC, la economía política y la situación actual del país.



Gracias a este seminario, a la orientación del partido y al trabajo del compañero Mauricio Vargas, dirigente de la Jupa, realizados en: Cátedra por la Paz en colegios, activistas de Paz a la Calle y miembros de colectivos juveniles y ambientales, un contingente de 30 jóvenes universitarios

han ingresado al PTC en Antioquia. Se espera que con jornadas como las realizadas el 5 de marzo, se pueda avanzar en la formación y la cualificación de estos compañeros, para cumplir a cabalidad con la tarea de organización y crecimiento del PTC en la juventud (foto 10).



El Ptc-Atlántico, en el día de ayer, realizó con rotundo éxito el encuentro de nuestros dirigentes barriales. Asistieron 45 compañeras(os), de los cuales 25 tienen liderazgo en las Juntas de Acciones Comunes de sus barrios, también estuvieron presentes varios líderes y gestores sociales, culturales, ambientales y deportivos. Igualmente se contó con la presencia de Rafael Sanchez Anillo(ex-candidato a la alcaldía de Barranquilla, por firmas: sacó más de 100 mil votos en las elecciones anteriores). Finalmente, se constituyó la nueva Comisión del frente de barrios y localidades de Barranquilla. Estos son resultados del proceso de reorganización y crecimiento que nos propusimos desde el año pasado.



En el centenario de la Revolución Rusa de 1917

NUEVA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL OCTUBRE ROJO DEL SIGLO XX

Alexis Medina

HISTORIADOR UNIVERSIDAD NACIONAL

En el marco del centenario de la Revolución Rusa ocurrida el 7 de noviembre de 1917, de acuerdo con el calendario gregoriano que nos rige¹, se editarán clásicas y nuevas obras sobre los decisivos años de la Gran Guerra y el ascenso bolchevique al poder. Conviene señalar que este aspecto, positivo por cuanto contribuye al debate de las ideas revolucionarias y el marxismo, debe ser leído con suma atención para considerar los factores políticos e ideológicos que orientan la interpretación de este acontecimiento de gran significación histórica. Aun cuando no se hará un exhaustivo balance bibliográfico, a continuación se hará mención de aquellas obras que se editarán este 2017.

Los trabajos que circularán durante este año se pueden agrupar en tres tipos. De una parte, encontramos aquellos trabajos historiográficos que reconstruyen el contexto a partir de acontecimientos, problemas específicos –papel del campesinado y la tierra, transformaciones mundiales durante la Gran Guerra, etc.–,² o grandes relatos sobre la Revolución Rusa y el siglo XX³, de otra, existen publicaciones que podríamos denominar de época y que están constituidas por crónicas, memorias y documentación epistolar escrita por personajes que vivieron las transformaciones de 1917. Por último, ubicamos una producción bibliográfica elaborada por quienes ejercieron roles diplomáticos y funciones estatales en el marco de la Guerra Fría, cuya característica principal es la rica documentación de archivo leída bajo un prisma ideológico⁴.

La traducción para el mundo hispano del texto de Catherine Merridale, *El tren de Lenin. Los orígenes de la revolución rusa* (2017), constituye un aporte valioso que reconstruye la ruta que emprendió Vladímir Ilich Uliánov desde Zúrich hasta la estación de Finlandia en Petrogrado –hoy San Petersburgo– en abril de 1917, y cuyo retorno “fue un viaje que cambió el mundo” (19). La revolución rusa, para entonces, había agotado su etapa democrático-burguesa una vez ocurridos los hechos de febrero-marzo que pusieron fin a la dinastía de los Romanov.

A través de documentos que reposan en museos ferroviarios, Merridale logra reconstruir las rutas realmente existentes, dado que “(...) la mayoría de los expertos lo envían [a Lenin] al norte, por una línea ferroviaria que ni siquiera estaba construida en 1917” (23). La autora ubica el recorrido en un contexto que le permite presentar el periodo 1916-1917, que se caracterizó por tener el invierno más fuerte desde el inicio de la guerra y extender la penuria de los obreros para la consecución de productos básicos. El efecto: un recha-

zamiento general hacia Nicolás II y la emperatriz, así como la participación rusa en la Triple Entente, con el consecuente aumento de las protestas que transitaban de las reivindicaciones económicas a las políticas. La debilidad del régimen zarista devino como producto de una parálisis institucional, ocasionada por rumores de conspiración interna y una carencia de servicios secretos unificados. Al rechazo popular se sumó la división de las élites entre un pequeño grupo cortesano en el poder y una gran mayoría de burgueses y terratenientes que se le oponían a través de una línea política que fluctuaba entre el radicalismo y la reacción. La relación entre Lenin y los alemanes, dada las características del retorno del exilio, es un problema que de manera transversal atraviesa el texto de Merridale. Ante la incapacidad de infiltrar el oriente europeo tras su expulsión diplomática y cerrar vías al comercio, alentar descontentos sociales a nivel nacional fue la estrategia germana desplegada.



Vladímir Lenin se dirige a una multitud en la Plaza Roja de Moscú el 25 de mayo de 1919

zo general hacia Nicolás II y la emperatriz, así como la participación rusa en la Triple Entente, con el consecuente aumento de las protestas que transitaban de las reivindicaciones económicas a las políticas.

La debilidad del régimen zarista devino como producto de una parálisis institucional, ocasionada por rumores de conspiración interna y una carencia de servicios secretos unificados. Al rechazo popular se sumó la división de las élites entre un pequeño grupo cortesano en el poder y una gran mayoría de burgueses y terratenientes que se le oponían a través de una línea política que fluctuaba entre el radicalismo y la reacción.

La relación entre Lenin y los alemanes, dada las características del retorno del exilio, es un problema que de manera transversal atraviesa el texto de Merridale. Ante la incapacidad de infiltrar el oriente europeo tras su expulsión diplomática y cerrar vías al comercio, alentar descontentos sociales a nivel nacional fue la estrategia germana desplegada.



En regla, Lenin siempre buscó deslindar campos: aunque se benefició del interés alemán por desestabilizar al régimen ruso y, en consecuencia, alejarlo como un actor de la Gran Guerra, siempre denunció su rol imperialista y lo poco benéfico que resultaba para éstos una revolución de carácter proletaria y campesina que podría extenderse por toda Europa. El viaje emprendido en aquel tren sellado era una especie de “gana-gana”: neutralizar a Rusia, antes que la viabilidad o no del régimen propuesto por Lenin, era el objetivo de los alemanes, algo que éste supo capitalizar a su favor para retornar del exilio y convertir el bolchevismo en una alternativa para la toma revolucionaria del poder político.

Otro de los trabajos que se editarán será el de Julián Casanova, *La venganza de los siervos. Rusia 1917* (2017). A comienzos del siglo XX, la Rusia zarista era mayoritariamente campesina, una sociedad tradicional que carecía de una poderosa burguesía con amplias capas medias que permitieran el desarrollo de un régimen democrático liberal y en la que, sin embargo, el poder autocrático y terrateniente se encontraba debilitado como producto de la incapacidad para gobernar extensos territorios y diversidades nacionales, así como por efecto de las migraciones del campo a la ciudad producto de la expansión industrial que, mediante capital extranjero, amplió el sector minero, textil y metalúrgico. Para este historiador, la crisis revolucionaria se desató ante la incapacidad de los Romanov para enfrentar una situación internacional que contaba con potencias económicas y militarmente más fuertes.

Aun cuando no se conoce nueva reedición para este año, una obra considerada de época y clásica es la del periodista John Reed, *Diez días que estremecieron al mundo*. Sin duda, un libro de recomendada lectura por su valor. En las librerías, no obstante, se podrá encontrar las *Cartas desde la revolución bolchevique*, un texto que reproduce las comunicaciones escritas por el entonces diplomático Jacques Sadoul, quien transmitió al gobierno francés el acontecer en las calles y el desenvolvimiento de los hechos que llevaron a Lenin al poder. Este trabajo tiene el componente vivencial y directo, constituyendo un baluarte documental que permite analizar las contingencias que hubieron de resolver Lenin y el pueblo ruso.

Por último, un particular tipo de obras se caracteriza por su riqueza documental aunque leída con un enfoque propio de la Guerra Fría. Miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ronald Reagan y catedrático de la Universidad de Harvard, Richard Pipes publicó inicialmente en 1992 una de las obras más extensas sobre la revolución rusa, lo que se sumó a un amplio número de publicaciones realizadas que le permitieron ser considerado un especialista en cuanto tiene que ver con la Unión Soviética.

La reedición de su obra *La Revolución Rusa*, al igual que *Breve historia de la revolución rusa* de Mira Milosevic-Juaristi, hace parte de los trabajos que consideran el triunfo bolchevique en noviembre de 1917 un golpe de Estado sobre el gobierno provisional antes que un cambio de régimen político, cuyo desenlace fue la imposición de un régimen de terror basado en el partido único. Para este enfoque, las trans-



Noche del 25 de octubre de 1917 (7 de noviembre en el calendario gregoriano). Los regimientos dirigidos por el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado cercan el Palacio de Invierno, sede del gobierno de Kerensky. Exigen la rendición de los batallones que aún lo defienden. Prácticamente sin resistencia, los soldados se rinden.

formaciones de fondo se produjeron una vez sustituido Nicolás II en febrero-marzo de ese mismo año. No es de extrañar, en consecuencia, que las conclusiones conservadoras de Pipes le permitan afirmar que “la Revolución Rusa fue uno de los sucesos más trágicos del siglo XX”⁵.

Aunque sería injusto clasificarla bajo el mismo enfoque de Pipes, el trabajo clásico de Edward Hallett Carr, diplomático y periodista británico, constituye una referencia importante. De los catorce volúmenes dedicados al estudio de la Rusia soviética, tres de estos se concentraron en el periodo revolucionario y el papel de Lenin. Esta extensa obra se sumó a una amplia bibliografía producida posteriormente sobre la etapa pre y pos revolucionaria que, si bien no tiene un enfoque marxista, contiene mayores matices que le permiten afirmar, para cerrar, que “(...) Lenin, con toda su fama de dirigente revolucionario, fue un creador más que un destructor [que] sobresalió de entre sus contemporáneos por la constancia y devoción de su entrega a la causa, por la claridad y energía de sus ideas y por su jefatura práctica en momentos críticos”⁶.

Notas

- 1 Para claridad del lector: hasta el 31 de enero de 1918, Rusia siguió el calendario juliano, el cual contaba con trece días de retraso en comparación con el calendario gregoriano que se usaba en Europa occidental. El gobierno bolchevique, una vez en el poder, modificó el calendario adaptándose al gregoriano que rige hasta nuestros días. En los textos de Lenin y gran parte de los trabajos publicados sobre la revolución bolchevique, se usan las fechas del calendario juliano de aquel entonces.
- 2 Un tipo de trabajo historiográfico específico es, de igual manera, la biografía. Aunque su orientación es trotskista y gran parte de sus trabajos sobre la Rusia soviética estuvieron dedicados a él, recomendamos a quien interese la biografía escrita por Isaac Deutscher: *La vida de Lenin*. Desconocemos si la misma se encuentra en proceso de reedición.
- 3 El mejor ejemplo de este enfoque es el trabajo del historiador marxista Josep Fontana: *El siglo de la revolución. Una historia del mundo de 1914 a 2017*, (2017). Este libro se suma a los realizados por el marxista británico Eric Hobsbawm (1917-2012) quien realizó interpretaciones sobre el siglo XX haciendo una

- 5 *El País*. “Richard Pipes: “No hubo nada positivo ni grandioso en la Revolución Rusa”. Enero 27 de 2017. Aunque importante desde el punto de vista histórico y rico en documentación que es necesario conocer, igual conclusión de orden político e ideológico se desprende del sugestivo título del libro de Orlando Figes: *La Revolución Rusa: la tragedia de un pueblo* (1891-1924).
- 6 Carr, E. H. *Lenin: el constructor*. En: Carr, E. H. *Estudios sobre la revolución*. Madrid: Alianza Editorial, 1970. P, 134-135.



El fascismo es el peor enemigo de las mujeres. Todo el mundo en la lucha contra el fascismo! Cartel alusivo al llamamiento para que las mujeres se sumen a la defensa de la revolución.

La corrupción en Colombia

EL GOTA A GOTA DEL DESTAPE DE ODEBRECHT

Jorge Enrique Charry

JEFE DE REDACCIÓN DE LA BAGATELA

Poco a poco se va sabiendo lo que pasó. Los medios no pudieron callar la magnitud del escándalo. Pero las investigaciones van tomando un camino que de una u otra manera dejan “limpios” a personas e instituciones que deberían ser investigadas, como el fiscal general y el poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval, con cinco bancos y Corficolombia).

Veamos. La revista *Semana* (marzo 12 de 2017) estima que son cinco los frentes de investigación que hasta ahora están andando —otros medios hablan de 11 líneas de trabajo—:

1. Ruta del Sol Tramo II: 2009, gobierno de Uribe. Ya está preso el viceministro de Transporte del gobierno Uribe Gabriel García Morales, quien confesó haber recibido 6,5 millones de dólares, y está colaborando con la Fiscalía.
2. Adición Ocaña Gamarra: Otto Bula, ex-senador que reemplazó en el Senado a Mario Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe, cuando este fue capturado por parapolítica, aceptó que recibió 4,6 millones de dólares.
3. Carrusel de la contratación en Bogotá: Contrato del túnel Tunjuelo Canoas. Hablan de que aquí los hermanos Moreno Rojas recibieron un millón de dólares.
4. Navelena y el crédito del Banco Agrario por 120 000 millones de pesos, crédito que se usó para pagarle una obligación al Banco de Occidente (Grupo Aval), que se otorgó cuando ya Odebrecht estaba en serios problemas en Colombia.
5. Campañas presidenciales de 2010 y 2014. Ahora se sabe de la campaña de Santos en 2010.

Pero lo que comenzó con un viceministro preso por la adjudicación de una carretera, ha terminado en el fuerte escándalo de la financiación ilícita de las campañas electorales. Inicialmente a la de Zuluaga pero terminó en que también involucra la del actual presidente de la República.

La mano de los gringos

Lo primero que hay que resaltar es que las investigaciones de las denuncias en Colombia sobre Odebrecht se inician y causan revuelo general es porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió investigación a la multinacional brasileña. De no ser así, tal vez no estaría pasando nada, como ocurre en muchos casos de corrupción de las multinacionales en contratos con agencias estatales en todos los campos: infraestructura, comunicaciones, feria de entidades públicas, etcétera.

La investigación del Departamento de Justicia se debe a que Odebrecht utilizó el sistema bancario norteamericano para mover los millones de dólares con los que pagaron los sobornos, fundamentalmente a través de los denominados paraísos fiscales alrededor del mundo: Hong Kong, Andorra, Panamá, entre otros.

Estos paraísos fiscales son parte fundamental de la red bancaria del imperialismo para burlar leyes fiscales no solo en Estados Unidos sino en el resto del planeta. En este momento hay 170 funcionarios de Odebrecht respondiendo ante la justicia norteamericana y colaborando con ella. Es por ello que se destapa el embrollo, tanto en Colombia como en América Latina.

Muy pocos medios de comunicación hablan de este hecho. Sin embargo, un editorial *El Espectador* señaló: “Tal vez lo más diciente de todo esto es que sin el actuar de la justicia extranjera, el país posiblemente seguiría ingenuo sin conocer la influencia indebida en las elecciones y todo el entramado que hay detrás del ‘juego’ de la política” (15 de marzo de 2017).

En segundo lugar, es evidente que Estados Unidos utiliza políticamente estas investigaciones. Es por ello que fijan la mira en Brasil para, inicialmente, golpear a los gobiernos del PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pero las actuaciones dolosas de Odebrecht se desarrollaron en varios países, sin importar el matiz político de sus gobiernos. Para la muestra un botón: el dinero que lograron infiltrar en las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014.

El fiscal general y el Grupo Aval

¿Cómo se adelantan las investigaciones en Colombia? Hay que resaltar dos aspectos fundamentales:

El ente encargado de investigar es la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Néstor Humberto Martínez, recientemente posesionado. Y ahí hay una contradicción de bulto.

El fiscal Martínez, en principio, tendría varios impedimentos. Está demostrado que fue abogado, él y su firma de abogados, de Luis Carlos Sarmiento, dueño del Grupo Aval. Y este grupo es el socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II por intermedio de la compañía Corficolombia que tiene el 33% de ese contrato.

El fiscal Martínez era ministro de la Presidencia (un cargo inventado por Santos), es decir era el jefe de los ministros del Gabinete, y en calidad de tal, participó en el Conpes que aprobó la adición (el otrosí) a la Ruta del Sol II para entregar a Odebrecht y Corficolombia el tramo Ocaña Gamarra y además alargar por cinco años más toda la concesión y regalarles nuevos peajes. Por ese otrosí están llamadas a declarar la exministra de Transporte Cecilia Álvarez y la exministra

La maleta de Bula?



de Educación Gina Parodi, esta última porque su familia es dueña de un puerto sobre el río Magdalena que se construirá, precisamente en Gamarra. Pero si hay alguna sospecha sobre las ministras, ¿por qué no se investiga a Néstor Humberto Martínez?

Pero el Grupo Aval está más que inmerso en este contrato. Daniel Coronell denunció en su columna de *Semana* (marzo 12 de 2017) que la funcionaria Victoria Guarín de la corporación financiera internacional (Banco Mundial) participó en la estructuración de la licitación Ruta del Sol, y que ella es la esposa de Diego Solano, vicepresidente financiero del Grupo Aval. Si el fiscal Néstor Humberto Martínez era un empleado de Luis Carlos Sarmiento, ¿será imparcial en las investigaciones? Si el fiscal Néstor Humberto Martínez era el jefe del Gabinete cuando se adjudicó Ruta del Sol II, ¿será imparcial en esta investigación? El senador Jorge Robledo ya denunció ante la Comisión de Acusaciones y la Procuraduría al fiscal Martínez para que se declare impedido en todo este caso.

Hay algo más, por ahora. En el caso de Navelena empresa que logró un crédito por 120.000 millones de pesos de una entidad estatal como es el Banco Agrario, y que después modificaron el objeto del crédito para pagar una deuda de Odebrecht con el Banco de Occidente (Grupo Aval), ¿podrá el fiscal ser imparcial en esta investigación? ¿Qué papel cumplió en este caso el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien preside la junta directiva del Banco Agrario? ¿Desembolsaron 120.000 millones de pesos “a sus espaldas”?

Odebrecht en la política colombiana

Está demostrada la participación de esta multinacional en sobornos a muchos

gobiernos de América Latina. En Perú, por ejemplo, investiga que el entonces presidente Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares. En Colombia, la multinacional financió la primera campaña de Santos en 2010 con 400 000 dólares, y que en 2014 financió a Óscar Iván Zuluaga con el pago a un publicista de Brasil, Duda Mendonça, con 1,6 millones de dólares y la de Santos con uno o con dos millones de dólares.

La opinión pública ya ha conocido la confesión de Otto Bula en el sentido que recibió 4,6 millones de dólares de Odebrecht en el 2014. Pero Otto Bula es un personaje siniestro, enredado con la Oficina de Envigado, suplente de Mario Uribe (el primo de Álvaro Uribe), al que ya le están incautando múltiples bienes.

La confesión de Roberto Prieto

Cuando comenzó el escándalo el presidente Santos alcanzó a decir que el gerente de sus campañas era una persona honesta y de su entera confianza. Pero a los pocos días la situación de este personaje cambió radicalmente, al punto que tuvo que aceptar públicamente que sí sabía de la financiación de Odebrecht en la campaña de 2010 con 400.000 dólares y que eso era irregular. A pesar de su “entera confianza”, el presidente tuvo que salir a pedirles perdón a los colombianos por estos hechos “bochornosos”.

Lo cierto es que Prieto resultó ser otro personaje siniestro. Durante el gobierno de Santos pasó a ser un megacontratista de una treintena de dependencias oficiales a través de una empresa familiar (Marketmedios). También se sabe ya que ha utilizado su cercanía con el presidente para intervenir en las entidades esta-





campana presidencial 2014, a instancias de Odebrecht, ¿no le pasa nada?

Fue a mis espaldas

Tanto Roberto Prieto como otros directivos de las campañas presidenciales han insistido en que no supieron de ningún aporte ilegal. Por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga ha dicho que no supo que la multinacional brasileña pagara al publicista Duda Mendonça 1,6 millones de dólares por su asesoría. Pero como lo dijo el profesor Wasserman, “cuesta creer que Odebrecht hiciera donaciones con la condición de que los candidatos no se enteraran”.

La conclusión principal es que el sistema electoral y político colombiano es totalmente corrupto. Eso lo percibe la opinión hace más de un siglo. Los políticos que defienden al establecimiento utilizan los cargos públicos para enriquecerse. ¿Cómo esconder el hecho evidente del trasteo y la compra de votos, la utilización del aparato estatal, a todo nivel, para favorecer a uno u otro candidato? Y mil triquiñuelas más que distorsionan el aparente sistema democrático en Colombia.

Pero en el caso que se destapa con Odebrecht pareciera que esto se sale de madre. Banqueros, altos funcionarios del Estado, personas con vínculos con la mafia y el paramilitarismo, “respetables empresarios”, en fin, lo que llamamos el establecimiento, están implicados.

Conclusión

Frente al renovado vuelo que ha tomado la oposición al gobierno por parte de Uribe y los sectores de la extrema derecha que lo acompañan, la opinión democrática debe aclarar que Juan Manuel Santos en la campaña presidencial de 2010 era el candidato del uribismo, debe quedar claro que Odebrecht, más que “acercarse” a Santos, con sus aportes estaba complaciendo al gobierno de Uribe Vélez en 2010. El escándalo de Odebrecht no debe desviar al país de que lo principal es consolidar el proceso de paz con las Farc, obviamente para continuar en mejores condiciones políticas la movilización por la soberanía nacional, la lucha contra la corrupción y las reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano.

→
tales encargadas de la infraestructura, particularmente están comprobadas sus reuniones con el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para averiguar por proyectos en los que estaba interesada Odebrecht y otras firmas internacionales.

Lo curioso del caso es que Prieto no tiene acciones en la empresa familiar, además no tiene una sola propiedad en Colombia. Sin embargo, *El Tiempo* reveló, en su edición del 20 de marzo de 2017, que “Prieto es dueño de una valiosa propiedad en Boca Ratón, Florida. Además, de una filial de Marketmedios que, según libros contables, tiene nexos con la empresa familiar que él ha gerenciado en Colombia”. El mismo artículo establece que “Prieto tendrá que empezar por ex-

plicar cuestionados aportes a la campaña que ya suman 1.200 millones de pesos. Hasta ahora, ha admitido haber ejecutado 400.000 dólares que Odebrecht le hizo llegar por fuera de la contabilidad y que se usaron para 2 millones de afiches. Pero ya empezaron a aparecer otros, Rodrigo Jaramillo confesó que el Grupo Interbolsa transfirió 150.000 dólares después de la campaña”.

¿Cuántos implicados faltan por conocer?

No se sabe todavía. Pero se debe investigar al exprocurador Ordoñez por haber “engavetado” expedientes sobre el mismo caso. Tampoco está clara la inocencia de Germán Vargas Lleras en el asunto: ¿cómo es posible que el encargado de coordinar todo lo relacionado con la in-

fraestructura del país no se hubiera percatado de absolutamente nada? Además, el partido del hoy exvicepresidente, Cambio Radical, tiene varios gobernadores departamentales en líos con la justicia, dos de ellos presos; y Plinio Olano, con el apoyo de Cambio Radical, fue recientemente nombrado director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y acaba de ser sindicado como parte del equipo de Odebrecht en Colombia, e hizo parte del acoso para asegurar la adjudicación de la Ruta del Sol II a Odebrecht y Corficolombia.

¿Y Álvaro Uribe está limpio? ¿No supo de ningún aporte ilegal a la campaña de Zuluaga? Hace rodar la cabeza de Óscar Iván Zuluaga, pero al otro candidato, Iván Duque, que viajó con Zuluaga a Brasil para reunirse con Duda Mendonça durante la

Paradoja

matador



La secretaria



matador

LA PAZ, PATRIMONIO HISTÓRICO

El autor de este artículo, sobresaliente jurista de las filas de la democracia colombiana, expone su punto de vista sobre el largo conflicto que parece llegar a su fin después de medio siglo. Basada en su conferencia dictada en la sede del PTC a militantes y amigos, ofrecemos a nuestros lectores una síntesis que el autor elaboró para esta edición de La Bagatela.

Iván Acuña

ABOGADO

La construcción de la paz en Colombia debe mirarse como una obra histórica y no como una mera conquista personal del presidente Santos. Mirarlo de esa otra manera es una auténtica mezquindad política.

El Estado colombiano en el transcurso de 34 años, desde 1982, había fracasado en su intento, y siete tentativas de acuerdos de paz se vieron frustradas por diferentes razones, pero en el fondo de todas, por la reticencia de las Farc a lograr acuerdos de paz, mientras no se discutiera el modelo económico y militar del Estado.

La violencia política en Colombia se encuentra desde la misma conformación del Estado colombiano, pero fue la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán quien aproximó el nacimiento de las llamadas guerrillas liberales bajo el mando de Guadalupe Salcedo, amnistiadas en 1953, por el gobierno de Rojas Pinilla.

Aupados por las revoluciones socialistas rusa de 1917, liderada por Lenin; la popular de nueva democracia china de 1949, dirigida por Mao Tzedong y principalmente la revolución socialista cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, los movimientos insurgentes levantaron la consigna de la toma del poder por la vía armada y así se constituyeron la Farc, el ELN, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y posteriormente, en 1970 se funda el M-19, como producto del fraude electoral que llevó al poder a Misael Pastrana Borrero.

Los movimientos guerrilleros colombianos estaban inspirados en las revoluciones de los otros países y así existían los de la corriente soviética como las Farc, los maoístas como el EPL y los de inspiración en la revolución cubana como el ELN, lo cual hacía mucho más difícil los acuerdos de paz.

Quizá el presidente pos Frente Nacional que más se esmeró por dialogar y alcanzar acuerdos con los grupos guerrilleros fue Belisario Betancourt, curiosamente de origen conservador, quien ofreció amnistía general para los grupos alzados en armas y participación política. La inocultable presencia del narcotráfico en la vida nacional y el asesinato de funcionarios del alto gobierno perturbaron de alguna manera los acuerdos de paz, pero principalmente la toma del Palacio de Justicia por el grupo M-19. No obstante, el 28 de marzo de 1984, en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, se firmó el primer acuerdo de cese al fuego con la Farc.

Belisario Betancourt cimentó las bases para que el gobierno de Virgilio Barco,

firmara los primeros acuerdos de paz definitivos con algunos grupos armados, que sin ser los principales sí eran importantes, sobre todo el M-19, que de forma cinematográfica se había tomado la embajada de República Dominicana con varios embajadores dentro de su sede, el Palacio de Justicia que dio lugar a la irresponsable y desproporcionada intervención del gobierno al llamado "Holocausto del Palacio de Justicia", en donde no se solo murieron los guerrilleros del M-19, sino además muchos magistrados de esa alta Corte y desaparecieron por siempre a guerrilleros, funcionarios del Palacio de Justicia y exmagistrados auxiliares.

Los acuerdos de paz firmados por el Estado colombiano dirigido por Virgilio Barco quien promovió su política de paz, denominada "Iniciativa por la Paz" se suscribió con el M-19, el 19 de marzo, y con el EPL el 16 de mayo de 1990, y permitió que estos grupos participaran por primera vez en el debate electoral obteniendo un escaño en la Cámara de Representantes, algunas pocas alcaldías, concejales y diputados.

Se reconoció a estos grupos recién reinsertados a la vida civil como actores políticos y paralelamente nace la Unión Patriótica (UP) como partido de las Farc, pero también integrado por el Partido Comunista Colombiano, indígenas, estudiantes y diferentes sectores sociales. La Unión Patriótica fue exterminada y se calcula que se asesinaron más de 5.000 de sus militantes y otros más desaparecidos. Los pocos que sobrevivieron debieron exiliarse.

Cesar Gaviria conversó con los grupos guerrilleros, que se organizaron a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las Farc, ELN y un reducto del EPL en los llamados "Diálogos de Paz de Tlaxcala" en México, que terminaron sin éxito a raíz de la muerte del exministro Angelino Durán el 4 de mayo de 1992.

A pesar del fracaso de este nuevo intento de paz con los principales grupos guerrilleros, se firmaron acuerdos con el PRT, el Movimiento Indígena Quintín Lame y algunas fracciones del ELN y el EPL.

En este apretado resumen histórico en donde los otros presidentes pos Frente Nacional también lo intentaron sin lograrlo, y dos de ellos descalifican los acuerdos de paz definitivos alcanzados con la guerrilla utilizando diferentes argumentos, pero principalmente reclamando un "castigo ejemplar" para los, según ellos, autores de crímenes de lesa humanidad, desconociendo que para los grupos insurgentes firmantes de la paz hay una justicia especial, una justicia más política que ordinaria, en el entendido que se li-



bera a Colombia de una larga guerra, con costos infinitamente superiores a los que conlleva la paz.

Por eso la paz alcanzada por el gobierno Santos, hará parte de nuestro patrimonio histórico.

En Magangué

EDILES RECLAMAN SEDE PARA SESIONAR



Un grupo mayoritario de ediles de las distintas localidades de Magangué ha elevado su voz de protesta ante la indiferencia y el desconocimiento a su labor y a sus justas peticiones por parte de la respectiva alcaldía.

El primer paso dado por los cabildantes fue organizarse y crear la asociación de ediles del municipio como su órgano legal y representativo ante las instancias gubernamentales.

Su actividad la ejercen en difíciles condiciones. Además de no tener remuneración alguna, ni prestaciones ni servicio de salud, también carecen de un espacio para sesionar y de oficinas para atender los asuntos políticos que su cargo exige. A través de un derecho de petición presentado a la administra-

ción local, intentaron solucionar sus dificultades, pero fue contestado con evasiones.

Obligados por las circunstancias acudieron a una tutela presentada ante la procuraduría y la contraloría que fue rechazada por un juez, aduciendo falta de pruebas. Inmediatamente los ediles adjuntaron una serie de documentos y certificados sustentando su petición y están a la espera del fallo que debe salir esta semana.

Las adversidades han motivado a los ediles a enfrentar las dificultades, y a pesar que les ha tocado sesionar en la calle y en las plazas para cumplir con sus votantes y con las obligaciones que la ley les exige, están dispuestos a dar la batalla hasta el final para dar a conocer ampliamente su situación, incluso viajando a Bogotá.

Ciclismo mundial

AUGURIOS FELICES EN EL COMIENZO DEL AÑO

Alberto Herrera

Cruzó la meta de último, sin embargo se coronó campeón. Puede sonar extraño, pero así sucedió; era la etapa final, una contrarreloj individual donde salen uno por uno y el cabeza de la clasificación general, parte después de todos. Aunque esta modalidad no es su fuerte, la ventaja obtenida en la escalada al alto de Terminillo en la etapa reina de la Tirreno-Adriático, tradicional clásica que se disputa en territorio italiano, fue suficiente para volverse inalcanzable. Durante siete días, Nairo se batió con éxito en todos los terrenos. Con su actuación conquistó el segundo triunfo en las clásicas del World Tour 2017.

El inicio de año ha puesto muy en alto al ciclismo colombiano. La Paris-Niza fue ganada por Sergio Henao con estrecha ventaja (2 segundos) a Contador; es compatriota un esprinter, Fernando Gaviria, que a los 21 años ya ha derrotado a los consagrados y se esperan mayores éxitos. Ha sido el resultado de una tradición deportiva que distingue a los corredores de nuestros colores. La camada actual es la más gananciosa, con su pedaleo se ha enganchado en equipos poderosos, a los colombianos se les reconocen su capacidad y entrega, y se les respeta en carretera. El listado se alarga y detrás de Nairo y de Esteban, las cartas para el Tour, hay una pléyade selecta de pedalistas como nunca antes. Enhorabuena.

Y tienen otro rasgo los escarabajos, ahora convertidos en escaladores-todoterreno: piden respaldo porque sienten que sigue faltado patrocinio y apoyo, lo reclaman desde la época del Zipa, pasando por el equipo Coldeportes y llegando a la federación de ciclismo. La afición está de acuerdo y los respalda. Nairo se formó ciclista por su cuenta, yendo al colegio. Las peticiones hechas por Winner Anacona, como por Esteban Chaves y más recientemente por Mariana Pajón, son justas. Tanto, que a Bogotá le toco meterle la mano a los campeonatos nacionales recién realizados, después de la sórdida respuesta del alcalde a Chaves. Si no existen voces que se atrevan, poco o nada harían nuestros dirigentes. ¿Cómo es que en Colombia no se desarrolla siquiera una carrera del calendario internacional?

Otro hecho notorio, que no se puede pasar por alto, se da en el pelotón internacional: el equipo Sky está en la mira, hay claras evidencias de acudir al doping, tanto fisiológico como mecánico, de tiempo atrás. Llama la atención que su estrella, Chris Froome no firme un memorando del equipo abogando por el manager Dave Brailsford, así después le dé el respaldo.

¿Hasta dónde se ha “limpiado” la práctica del ciclismo élite?

¿Realmente se superó la era Armstrong, o ahora es más refinado el doping?



Solo basta que aparezca la cuesta para que Nairo, el mejor escalador del mundo, rompa el lote en mil pedazos. Inicio de la remontada al Terminillo.



Con la rosada del Giro, en visita al templo del ciclismo en Boyacá, la casa paterna de los Quintana.



La fundación Esteban Chaves, una obra de su familia, seleccionó 18 ciclistas entre 15 y 20 años, que quieren emular a su gestor.



En los campeonatos nacionales se impusieron los ciclistas que corren en el extranjero. Sergio Henao ganó la prueba de ruta seguido por Jarlinson Pantano, tercero Óscar Quiroz de Nariño.



El autor del artículo en compañía de Nairo.